



CENTRO DE
**POLÍTICAS
PÚBLICAS UC**

TEMAS DE LA AGENDA PÚBLICA

Encuesta Nacional Bicentenario Universidad Católica - Adimark 2009 «Una mirada al alma de Chile»

Seminario 6 de enero, 2010



Encuesta Nacional Bicentenario Universidad Católica - Adimark 2009 «Una mirada al alma de Chile»

Seminario 6 de enero, 2010

ÍNDICE

Prólogo

IGNACIO IRARRÁZAVAL, director del Centro de Políticas Públicas UC. 5

Introducción

De cara al Bicentenario: Preocupaciones y desafíos de la sociedad chilena

MONSEÑOR ANDRÉS ARTEAGA, obispo auxiliar de Santiago y Vice Gran Canciller de la Pontificia Universidad Católica de Chile. 7

Exposiciones

1. El pulso de la política

El (im)pulso de la política: Continuidad y cambio del sistema político chileno 11

SERGIO TORO, académico del Instituto de Ciencia Política UC.

2. Familia y fecundidad

RODRIGO CERDA, académico del Instituto de Economía UC. 19

Comentario

ESPERANZA CUETO, presidenta de ComunidadMujer. 25

3. Movilidad social y el dilema de más o menos Estado

Opinión pública y los determinantes de la pobreza y la riqueza en Chile 28

FLORENCIA TORCHE, académica del Instituto de Sociología UC.

Comentario

JAVIER NÚÑEZ, académico del Departamento de Economía de la Universidad de Chile. 33

RODRIGO CASTRO, vicedecano de Postgrado de la Facultad de Negocios de la Universidad del Desarrollo. 36

4. Transición religiosa

ANGÉLICA THUMALA, académica del Instituto de Sociología UC. 39

Comentario

JUAN SEPÚLVEDA, director de Planificación Institucional del Servicio Evangélico para el Desarrollo (SEPADE). 44

Prólogo

La presente versión de la Encuesta Nacional Bicentenario 2009 es el cuarto sondeo de una serie de cinco desarrollados por la Pontificia Universidad Católica de Chile junto a Adimark/GfK. Cada año, este estudio busca captar la esencia de la sociedad chilena a la luz del Bicentenario, pretendiendo convertirse en una fotografía que refleje el alma de nuestro país. A través de esta iniciativa se busca, además, recoger el llamado de la Conferencia Episcopal a abrir un “debate constructivo sobre el futuro de Chile”.

De esta manera, los datos de la Encuesta Nacional Bicentenario se ponen a disposición como la información inicial que contribuya al debate público sobre cuáles son las principales características y tendencias de nuestro país tras doscientos años de historia. Desde la Universidad Católica se busca entregar una herramienta útil para la reflexión crítica del rumbo nacional, esperando que este material constituya un aporte a investigaciones y proyectos que permitan resolver las principales problemáticas chilenas.

Este estudio se basa en una muestra probabilística de 2.025 encuestas presenciales con representatividad nacional, cuya responsabilidad técnica ha sido liderada por el Instituto de Sociología UC y Adimark/GfK, en lo que corresponde a diseño, aplicación y análisis de resultados.

Esta publicación es el reflejo de lo debatido en el seminario «Encuesta Nacional Bicentenario UC - Adimark. Una mirada al alma de Chile 2009», que se realizó el miércoles 6 de enero de 2010. En esa ocasión, se abordaron los principales temas que arrojó el último sondeo y que entregaron interesante información, riqueza en la reflexión y altura de miras sobre el futuro de nuestro país.

Los aspectos que se trataron se refieren, en primer lugar, al pulso de la política, asunto especialmente relevante en un año marcado por las elecciones presidenciales. Entre los datos arrojados en este ámbito se encuentra el alto reconocimiento al sistema presidencial chileno, al punto que el 72% de los encuestados aseguró estar de acuerdo con esta forma de gobierno. En cuanto a las características que debe tener un Jefe de Estado, la transparencia es el aspecto más mencionado, alcanzando un 60% de las respuestas.

En segundo término, la encuesta reflejó que, pese a la caída en la tasa de fecundidad, las chilenas desean más hijos de los que realmente tienen. La reflexión que plantea este resultado, y que se aborda en estas páginas, es un relevante desafío para las políticas públicas.

Como tercer tema, el sondeo indagó sobre la religiosidad de los chilenos. En este sentido, se observa que se mantiene la supremacía católica -el 67% adhiere a esta confesión- y que el cambio de religión es una realidad menos común en nuestro país que en otras naciones: sólo el 13% de los encuestados afirmó haber migrado alguna vez a otro credo.

Como cuarta y última área, la encuesta nos presenta el tema de la movilidad social y el dilema de más o menos Estado. De las cifras entregadas, se desprende que los chilenos valoran el esfuerzo personal como factor determinante de movilidad. De hecho, casi el 80% de los encuestados respondió que salir de la pobreza, transitar de la clase media a la alta y convertir una empresa pequeña en exitosa, dependen del esfuerzo y trabajo personal más que del Estado y las políticas públicas.

En este documento presentamos las principales ponencias sobre cada uno de los temas planteados anteriormente. Esperamos que sea un aporte que complemente los resultados de la Encuesta Nacional Bicentenario Universidad Católica - Adimark 2009.

IGNACIO IRARRÁZAVAL

DIRECTOR

CENTRO DE POLÍTICAS PÚBLICAS UC

De cara al Bicentenario: Preocupaciones y desafíos de la sociedad chilena

MONSEÑOR ANDRÉS ARTEAGA

Obispo auxiliar de Santiago y Vice Gran Canciller
de la Pontificia Universidad Católica de Chile

Y llegamos al Bicentenario. Una vez más, como desde hace cuatro años, nos encontramos para comentar los resultados de la Encuesta Nacional Bicentenario en el marco del seminario “Una mirada al alma de Chile”. El año pasado me propusieron el mismo tema para estas palabras introductorias: “Las preocupaciones y desafíos de la sociedad chilena”, a la luz de la vida de la Iglesia. Afirmé entonces que “la memoria agradecida del pasado permite tener una lúcida mirada al presente y una esperanza frente al futuro. Es de personas y pueblos maduros y responsables situarse frente al tiempo y la historia desde la propia identidad y la tradición. Se espera valorar el aporte de la fe cristiana y de la Iglesia Católica en la construcción de la identidad nacional y de nuestro futuro (...) Pues el Bicentenario es una oportunidad para asumir las responsabilidades que cada uno tiene en la construcción del futuro”.

En la entrega de 2009 destacan cinco aspectos relevantes para la sociedad y la Iglesia: el pulso de la política; familia y fecundidad; movilidad social y el dilema de más o menos Estado; el tránsito religioso y, finalmente, identidad nacional y conflicto. Siempre ha estado pre-

sente el tema religioso: en relación a la educación, a la piedad popular y también a la perseverancia (o como se ha llamado, al tránsito desde una confesión cristiana hacia otra, o de la fe a la increencia). No me corresponde comentar los resultados. De estas palabras se espera un marco de referencia, una valoración de esta iniciativa. También es la oportunidad de manifestar que para la Iglesia, para los discípulos de Jesucristo, nada de lo humano nos es ajeno. Por el contrario, nos interesa vivamente. Nos sentimos invitados y, más aún, urgidos a hacer un aporte desde nuestras convicciones y desde los frutos de nuestras acciones concretas.

Hay quienes estiman que una sociedad que ha perdido, olvidado o desconocido las raíces de su identidad cristiana, está suficientemente secularizada como la nuestra. Por lo tanto, tiene desafíos que la fe religiosa y, en particular la fe cristiana, no está en condiciones de responder y superar como lo hubiera podido hacer en el pasado¹. Se afirma, en base a estudios de marca realizados hace algunos meses (no de esta encuesta), que hoy tenemos una Iglesia “devaluada” (entendiendo por ella a la Iglesia Católica)². Esta sería, con unos pastores sin voz signi-

¹ Sobre el tema de la secularización, un buen análisis bibliográfico se puede ver en Kevin Schutz, *Secularization: A Bibliographic Essay*, en *The Hedgehog Review* (2006), (170-177). Especialmente lúcidos son los estudios de Charles Taylor, *A Secular Age*, Belknap Press of Harvard University Press, Cambridge 2007; y Mark C. Taylor, *After God*, University of Chicago Press 2009. También cf. Grace Davie - Paul Heelas - Linda Woodhead (editores), *Predicting Religion: Christian, Secular and Alternative Futures* (2003); Peter Berger et al., *The Desecularization of the World: Resurgent Religion and World Politics* (1999); *The Secularization Debate*, de la obra de Ronald Inglehart - Pippa Norris, *Sacred and Secular: Religion and Politics Worldwide*, Cambridge University Press, New York 2004. También de Ronald Inglehart - Wayne E. Baker, *Modernization, cultural change, and the persistence of traditional values*, *American Sociological Review* 65(2000), 19-51; Peter Berger, *Secularization Falsified*, en *First Things* 180(2008), 23-27.

² Como es sabido, un estudio ha dado cuenta de un sustantivo deterioro de la ‘imagen’ de la Iglesia Católica chilena. Desde un valor 91, la Iglesia Católica ha bajado a un valor 48 en una escala del 1 al 100. La seriedad que ostenta el estudio de marcas BAV no permite sospechar ningún tipo de alteración maliciosa. Pero el instrumento de medición, ¿para qué está diseñado? Al menos para indicar el valor que el consumidor tiene sobre una marca. En Chile midió 1.236 marcas, combinando globales y locales, en 132 categorías.

ficativa en el ámbito público, con fieles que piensan y actúan por sí mismos, sin la necesidad de otra autoridad externa y no como obediente rebaño; que no escuchan o no hacen caso, pues actúan autónomamente como adultos. Aunque ésta es una caricatura de la compleja realidad, la situación hace surgir algunas preguntas: ¿La Iglesia Católica es sólo una marca? ¿Su imagen es su identidad? ¿Puede amenazar su identidad profunda, su imagen pública? ¿Los pastores deben hablar acerca de todo? ¿Obedecer es no tener libertad? Esto me ha llevado a recordar a un filósofo español que ha denunciado no sólo el “imperialismo de la imagen”, sino que agrega la “anemia simbólica” de nuestra cultura. También el surgimiento de nuevas tiranías e ídolos en la opinión pública. Las respuestas no son fáciles ni simples. Evidentemente, las cuestiones planteadas por los datos reales son preocupantes para la fe y la praxis eclesial.

Cuando se explican los resultados de un estudio de valores de marca en Chile (aplicado a productos y también a instituciones) algunos hacen una importante precisión. No se trata, dicen, de un deterioro de la fe de los chilenos, sino de la “imagen” de la Iglesia Católica. Los chilenos siguen creyendo en el Señor, la Virgen y los santos. Lo ha destacado una versión anterior de esta encuesta, además de muchos otros datos³. He aquí el tema más interesante y, al mismo tiempo, más desafiante para la Iglesia: ¿A qué se debe esa distancia tan grande entre la imagen de la Iglesia y la fe de los chilenos? ¿Por qué la fe permanece y la imagen de la Iglesia se deteriora? Según algunos, el problema se debe a la excesiva concentración del discurso eclesial en temas de moral personal e individual (también sexual), en circunstancias de que existen otros problemas que afectan a los chilenos y de los cuales se esperaría una atención mayor por parte de la Iglesia, como los referidos a la justicia social. Sorprendentemente, se sugiere, además, que habría mayor adhesión a la Iglesia en la medida en que ésta afronte la reforma de la doctrina tradicional sobre temas como el celibato de los sacerdotes, el control de la natalidad y la relación con las familias divorciadas. Curiosa recomendación esta última. Abandonar temas de *moral sexual* para abordar temas de... *moral sexual*. ¿Acaso el celibato es un tema de justicia social? ¿O la píldora del día después es un asunto exclusivamente de moral sexual y no de salud pública, educación y otras dimensiones sociales?

En todo caso, más allá de la incoherencia, quizá inadvertida, lo que realmente se sugiere no es tanto ir de una moral a otra, sino liberalizar la moral tradicional. Algo que ya han intentado algunas iglesias cristianas en Europa, sólo que con resultados francamente desoladores. Allí ahora ya no solo no hay Iglesia. Tampoco hay fe. Por tanto, no parece que vaya por ahí la cosa. Pero la pregunta se mantiene en pie. ¿Cuál es la razón de esa supuesta escasa sintonía entre el pueblo fiel y la Iglesia institucional? ¿Qué falla en el diálogo de la Iglesia con su pueblo? ¿Qué causa este distanciamiento? Son muy buenas y legítimas preguntas. Aquí va otra explicación: la Iglesia que este pueblo fiel ve y oye, no le habla, o le habla muy poco, del Señor, la Virgen y los santos. Algo ha sucedido para que la Iglesia mencione escasamente los elementos esenciales que constituyen su fe. Para la gente que “cree en el Señor, la Virgen y los santos”, la Iglesia está prácticamente muda. No habla mucho de lo que más le puede consolar, fortalecer y animar en su vida. Ese pueblo quiere oír hablar de Dios. Y, permítanme acotar, si las instituciones de ayuda social no caen en el desprestigio no es porque éstas son de índole social, sino simplemente porque son esenciales. La justicia y la caridad también forman parte del núcleo esencial de la fe. Ni siquiera se puede entrar aquí a distinguir lo que es papel de la Iglesia y del Estado, clara y luminosamente explicitado en sus orientaciones fundamentales por el Santo Padre Benedicto XVI en sus encíclicas.

En todo caso, el tema fundamental para salir al paso de este desafío contemporáneo no es abandonar unos temas y aparecer con otros. Tampoco es hacerle rebajas a las exigencias morales. Se trata más bien de poder hablar de lo esencial con un lenguaje significativo que esté coherentemente tejido por palabras y hechos, como Dios ha hablado en la historia humana. Mientras esto no ocurra, las grandes masas que aún no tienen el privilegio de creer, difícilmente van a poder comprender la moral católica, ni la sexual ni la social.

La moral cristiana se caracteriza por tener como fundamento una ‘*antropología*’, es decir a) una concepción de la persona humana; b) de la *comunidad*, pues es un ser en sociedad y c) de su obrar (cf. GS 11-39). Más hondamente está el fundamento de una ‘*teología*’ cristiana, que concibe al ser humano en relación con Dios, llamado a

³ En Chile y en América Latina no hay tanto un deslizamiento hacia la increencia, sino hacia la indiferencia religiosa, una secularización más vasta en el contenido y profundidad de la fe, más que en su extensión numérica.

la existencia, salvado del pecado e invitado a la amistad y a compartir su propia vida. Dios es amor, toma la iniciativa e invita al ser humano a desplegar la vida desde el amor⁴. Unos fundamentos de este tipo no permiten una división y menos una contradicción entre moral personal y social, entre sexualidad y justicia. Como lo ha expuesto el Compendio de la Doctrina Social de la Iglesia, los temas que ella aborda parten por la realidad de la familia y su fundamento, el matrimonio, pasan por el trabajo, la vida económica, la comunidad política y llegan a las cuestiones de la comunidad internacional, la salvaguardia del medioambiente y la promoción de la paz. Todo el arco de lo humano constituye un 'humanismo integral y solidario'. Así como el ser humano es "uno en alma y cuerpo" (cf. GS 14) es –a la vez y siempre– un ser personal y social. No se puede separar lo que Dios ha unido. De esta forma, el análisis de los datos de esta encuesta no le pertenece exclusivamente al estadístico, al periodista, o al planificador social o político. Deben ser debatidos desde una perspectiva universitaria, es decir, desde la integración del saber. Y en el caso de esta casa de estudios, con la ventaja del diálogo de las diversas ciencias con la fe católica para el servicio de la dignidad humana, la cultura y el desarrollo de los pueblos.

En su última carta encíclica, el Santo Padre Benedicto XVI reconoce que "una de las causas del subdesarrollo es una falta de sabiduría, de reflexión, de pensamiento capaz de elaborar una síntesis orientadora" (*Caritas in Veritate* (CV) 31). Por otra parte, afirma que "uno de los aspectos del desarrollo actual es la importancia del tema del respeto a la vida que, en modo alguno, puede separarse de las cuestiones relacionadas con el desarrollo de los pueblos" (CV 28). "La Iglesia que se interesa por el verdadero desarrollo del hombre, exhorta a éste a que respeten los valores humanos también en el ejercicio de la sexualidad..." (CV 44). Y saca una consecuencia lógica: "Hoy es preciso afirmar que la cuestión social se ha convertido en una cuestión antropológica" (CV 75).

Una pregunta final: ¿Cuál es la medida de lo humano? ¿Acaso ya no es Cristo, sino el consumo? Tal vez habría

que leer con algo de atención a Zigmunt Bauman⁵ y sus críticas a una sociedad y cultura que hace "líquido" el tiempo y lo mejor de lo humano –el amor, la persona, la convivencia, la política– por la reducción de la vida al consumo. También sería conveniente tomar más en serio lo de la Misión Continental e iniciativas renovadoras de una fe más original y vívida, como las del Evangelio de Chile en que los cristianos se comprometen a escribir el Evangelio de Jesucristo en sus vidas en el Chile de hoy, a asimilarlo en la vida diaria, a anunciarlo con radicalidad del testimonio concreto.

Ayudar a comprender esos fundamentos del actuar cristiano es una tarea de toda la Iglesia para con los suyos y también para con los otros. Hay allí una tarea pendiente de profundizar en la evangelización de la cultura, llegar al corazón de lo que nos mueve, dar razón de nuestra esperanza y testimonio de esa esperanza que salva. De allí que volver a las fuentes con una actitud de discípulo y salir al mundo con actitud misionera, es una urgencia de los tiempos. Sólo así podremos colaborar para que en Cristo nuestro pueblo tenga vida. Y esto no se puede hacer a espaldas de la realidad. Ahí está el valor de las encuestas. Pero mucho más aún el tema de los criterios de interpretación de la realidad, que no pueden ser ideológicos, no pueden dejar aspectos afuera, tampoco lo religioso, tampoco a Dios. Como recordó el Santo Padre Benedicto XVI en la Conferencia General del Episcopado Latinoamericano y del Caribe en Aparecida, Brasil: "Sólo quien reconoce a Dios, conoce la realidad y puede responder a ella de modo adecuado y realmente humano". Lo otro es falsear la realidad y, algo peor, censurar las preguntas últimas y definitivas que inquietan el corazón humano.

Como señalara el profesor Fidel Sepúlveda en un escrito que se ha publicitado después de su muerte acerca de "Recuperar el Alma de Chile": A Chile hay que "recuperarle sus sentidos y su sentido para registrar la riqueza", "recuperarle el sentir y el ser", "el buen juicio para un discernimiento liberado", "la imaginación y los sueños", "la voluntad de ser". Hay que rescatarle su vinculación

4 Cf. Livio Melina, José Noriega, Juan José Pérez-Sorba, *La plenitud del obrar cristiano. Dinámica de la acción y perspectiva teológica de la moral*, Palabra, Madrid 2001; Caminar a la luz del amor. Los fundamentos de la moral cristiana, Palabra Madrid 2007.

5 Zygmunt Bauman (Poznam, Polonia, 1925). Es profesor emérito en la Universidad de Leeds y en la de Varsovia. Su extensa obra está referida a las problemáticas sociales y a los modos en que pueden ser abordadas en la teoría y en la práctica. Entre sus últimos libros en español: *La globalización. Consecuencias humanas* (1999), *En busca de la política* (2001), *La posmodernidad y sus descontentos* (2001), *Modernidad líquida* (2002), *Comunidad. En busca de seguridad en un mundo hostil* (2003), *La sociedad sitiada* (2004), *Vidas desperdiciadas. La modernidad y sus parias* (2005), *Amor líquido. Acerca de la fragilidad de los vínculos humanos* (2005), *Vida líquida* (2006), *Miedo líquido. La sociedad contemporánea y sus temores* (2007), *Vida de consumo* (2007), *Tiempos líquidos* (2007), *Arte, ¿líquido?* (2007), *Múltiples culturas, una sola humanidad*. (2008), *El arte de la vida. De la vida como obra de arte* (2009).

con un territorio, con una estirpe, con la familia, con la historia y la tradición. Lo cito textualmente: “¡Qué nos ha pasado que le tenemos miedo a pensar lo nuestro desde nosotros, a pensarnos sin importar plantillas promocionadas por el mercado! ¿Le tenemos miedo a diseñar nuestros planes de desarrollo desde nosotros, dándonos

tiempo para saber quiénes somos, de dónde venimos, a dónde vamos?”. Y sigue el maestro sabio: “No tenemos tiempo para lo esencial, porque el tiempo lo tenemos hipotecado para lo accesorio...”. Por eso estamos aquí, para estudiar lo esencial de nuestra nación y acercarnos a Chile, uno en alma y cuerpo.

El pulso de la política

El (im)pulso de la política: Continuidad y cambio del sistema político chileno

SERGIO TORO MAUREIRA

Académico del Instituto de Ciencia Política UC

Desde hace ya un buen tiempo, estudios comparados han demostrado que mientras el país posee un balance más que positivo en la generación de políticas y en el funcionamiento de sus instituciones, existen deudas importante en términos de las prácticas partidarias y de la estructuración de los vínculos entre ciudadanos y representantes, que no han permitido una plena maduración de nuestra democracia representativa. En efecto, la dinámica del sistema político en los últimos veinte años ha revelado debilidades importantes que han redundado en menores índices de participación electoral y de confianza en los partidos. Si observamos algunos datos de la encuesta del Centro de Estudios Públicos, vemos que la identificación partidaria pasó de un 22,1% de personas que no tenían identificación con una colectividad, en 1990, a cerca del 55% en 2008. De igual forma, la participación electoral, especialmente en los menores de 29 años, se ha reducido fuertemente, desde un 85% de inscritos en 1989 hasta apenas un 23% en 2009.

Ante ello, y de cara al Bicentenario, el sistema político chileno se enfrenta a grandes dilemas de continuidad y cambio. Las preguntas sobre la viabilidad de las reformas al sistema electoral, formas de gobierno o partidos políticos, están cobrando una vigencia que traspasan las barreras académicas y comienzan a insertarse en la ciudadanía. Los resultados de la Encuesta Nacional Bicentenario parecen confirmar esta afirmación. De un modo u otro, los chilenos tienen posiciones bastante claras sobre cómo se están comportando nuestras instituciones: para una gran cantidad de entrevistados el rol del Congreso parece no satisfacerles, lo que redundará en una fuerte adhesión al sistema presidencialista; la alta priori-

dad que se le entrega al voto voluntario refleja el desgaste del antiguo sistema de inscripción voluntaria y voto obligatorio; la fórmula de cuatro años con reelección presidencial se cruza con la necesidad que observan los ciudadanos de limitar los periodos a los parlamentarios; y la descentralización política y económica parece cobrar unanimidad.

¿Cómo interpretar estos resultados? ¿Cómo transformar las demandas ciudadanas en reformas políticas? En este ensayo me enfocaré en un elemento eje que se debe tener en consideración para los escenarios de reforma: el funcionamiento del presidencialismo chileno. Sostengo que el resultado abrumador en favor de mantener el actual sistema basado en la autoridad del Presidente (72% de los encuestados), no es un dato que llame a la calma sino, por el contrario, demanda un fortalecimiento de la legitimidad de las otras instituciones que equilibran el buen desempeño del sistema republicano. Esto debido principalmente a que la adhesión hacia el presidencialismo está secundada por un fuerte rechazo a las actividades del Poder Legislativo, síntoma que en otros países ha derivado en liderazgos personalistas que debilitan y colapsan la institucionalidad.

Las secciones de este ensayo se articularán de la siguiente manera. En primer lugar, se analizará la discusión actual sobre los presidencialismos y las implicancias que podrían determinar la interacción de un alto apoyo a esta forma de gobierno con la baja legitimidad del Congreso. Posteriormente se detallarán algunas acciones que podrían llevarse a cabo de cara a subsanar las posibles debilidades de nuestra democracia.

¿Por qué la adhesión al presidencialismo?

Uno de los puntos interesantes de la Encuesta Nacional Bicentenario es que nuevamente abre los flancos en torno a una discusión aún no zanjada en nuestro país: las virtudes y defectos del presidencialismo. Por cierto este debate no es nuevo. Debemos a Linz una de las líneas teóricas más relevantes sobre este tema. Su preocupación por el quiebre de la democracia y su intento por explicarlo con variables políticas, desembocó en una de las controversias más interesantes en la literatura institucional: la influencia de los presidencialismos en la caída de las democracias. En una explicación que le atribuía a elementos endógenos de este sistema, Linz intentaba advertir sobre los componentes negativos de la estructura presidencialista. En apretada síntesis, el autor observaba cuatro características fundamentales: a) la doble legitimidad de los poderes de gobierno, originada por la elección independiente del Presidente y el Congreso; b) la rigidez de los mandatos, dada la duración preestablecida; c) el estilo plebiscitario que puede asumir la elección del Presidente, y d) el mayoritarismo o lógica de “suma cero” derivada de la contienda electoral por la Presidencia.

Así, el autor entendía que las características endógenas del presidencialismo producían efectos secuenciales que comenzaban con bajos incentivos para las coaliciones y seguían con la generación de gobiernos de minoría, ineffectividad legislativa y bloqueo. Todos estos elementos conducían a conflictos entre el Ejecutivo y el Legislativo que posteriormente detonaban en crisis.

Los estudios posteriores fueron contraviniendo una a una las hipótesis de Linz. Por ejemplo, debemos a Carey y Shugart (1992) la reversibilidad de las características negativas, pues ambos advirtieron que los presidencialismos también contaban con ciertos componentes que tendían a reforzar, más que a debilitar, la estructura de los gobiernos. Es así como los autores centraron su observación en la capacidad de los presidencialismos de fortalecer el chequeo mutuo, la capacidad de accountability entre el votante y el Presidente, la identificación, y la capacidad de actuar como árbitro de los conflictos. De cierta manera, intentaban demostrar que bajo adecuados diseños institucionales los presidencialismos no deberían tener problemas en su funcionamiento.

Lo interesante es que mientras Shugart y Carey ayudaban a derribar la idea de características negativas del presidencialismo, otros se enfocaron en atacar las causas secuenciales identificadas por Linz. Para el caso de

los incentivos de generar coalición, la línea teórica fue amilando poco a poco el determinismo de Linz sobre su incapacidad para provocar este tipo de acuerdos. Mainwaring (1993), por ejemplo, en su artículo sobre la difícil combinación, sugería que eran sólo los presidencialismos con múltiples partidos los que podían generar problemas de inestabilidad. Esto debido principalmente a que las coaliciones tendían a ser post electorales y a que los compromisos de los legisladores hacia las negociaciones de los partidos eran menos seguros y con mayor probabilidad de quebrar la coalición que en el sistema parlamentario.

A este argumento le sigue Chasqueti (2002), quien señala la factibilidad de construcciones mayoritarias en los presidencialismos multipartidistas y que éstos, incluso, podían transformarse en formatos políticos institucionales eficaces para el mantenimiento de la estabilidad democrática. Es así como la idea del Presidente como *formateur* (Altman, 2000 y Cheibub et al. 2004) ayudó a que se pusiera en relevancia que los multipartidismos tenían la capacidad de generar coaliciones estables. En esto, Cheibub (2007) entrega algunas diferencias importantes respecto del parlamentarismo, sobre todo en la capacidad del Presidente para cambiar y generar otras coaliciones. También que el jefe de gobierno sea siempre el formador de alianzas y que, ante la incapacidad de generar coaliciones y estar en minoría, se mantiene por todo el mandato. Es precisamente este último punto el que nos lleva a la siguiente causa secuencial: el gobierno de minoría.

Autores como Mainwaring (1993), Mainwaring y Shugart (1997), Cheibub (2002), Cheibub y Limongi (2002) también contravienen la idea de que los gobiernos de minoría puedan mermar la capacidad del régimen. Los primeros señalan que los gobiernos de minoría tienen salidas especialmente con los poderes que los presidencialismos les confieren a los mandatarios. Esto es lo que se ha llamado “poderes proactivos” (porque le permiten al Presidente tratar de establecer un nuevo *statu quo* legislativo) y “reactivos” (porque sólo le permite al Presidente defender el *statu quo* ante las pretensiones de cambio del Legislativo). Por su parte, tanto Cheibub (2002) como Cheibub y Limongi (2002), sugieren que no sólo en los presidencialismos se dan gobiernos de minoría, sino también en los parlamentarismos. La clave, entonces, estaría en observar el apoyo del Congreso a través de la disciplina y las reglas institucionales, como el veto. En este sentido, Cheibub señala que las mayorías que el Presidente tiene sobre una u otra cámara legislativa en

sistemas bicamerales influyen notablemente en disuadir cualquier tipo de bloqueo.

Sin embargo, incluso en situaciones de bloqueo, algunos autores sostienen que la visión linzeana está equivocada en creer que este escenario puede llegar a transformarse en el detonante del conflicto y el quiebre. Cuando Cheibub (2002) se centró en analizar el bloqueo legislativo encontró tres elementos importantes. Primero, que las características del sistema electoral afectan los niveles de soporte legislativo de los presidentes y aumentan la probabilidad de gobiernos minoritarios. Segundo, que los gobiernos minoritarios no hacen más probables los bloqueos y, tercero, que el bloqueo no necesariamente afecta la sobrevivencia democrática. Así, con un análisis multivariado, demostró que el quiebre democrático no tiene nada que ver con la condición de bloqueo.

Pues bien, la caída una a una de los supuestos de Linz hizo que el propio Cheibub (2007) buscara zanjar un punto que aún quedaba pendiente: la idea de que los elementos endógenos del presidencialismo llevan a democracias menos estables. De esta forma, la hipótesis de su libro fue que las causas de la fragilidad de la democracia presidencialista no provenían de la estructura presidencial en sí misma, sino de una estrecha relación de esta forma de gobierno con el tipo de país que la ha adoptado en el mundo. Es decir, el presidencialismo había sido acogido por naciones donde cualquier tipo de democracia tenía probabilidad de quebrarse. Es así como Cheibub encuentra en la variable del legado militar la forma en que el presidencialismo deja de ser significativo, estadísticamente hablando. Con este trabajo, Cheibub da por zanjada buena parte de la discusión.

Sin embargo, a pesar de que Cheibub termina el debate al demostrar que la desestabilización democrática es una variable exógena, otro autor más contemporáneo, Pérez-Liñán y su trabajo *Presidential Impeachment* (2008), toma novedosamente el tema desde la punta causal de conflicto Ejecutivo-Legislativo con su relación de quiebre. Así, nos sugiere que las crisis ya no son parte de los regímenes, sino de los gobiernos. Que las salidas a conflictos que anteriormente detonaban en golpes Estado hoy eran resueltas por una institución constitucional que, a pesar de tener muchos años de vida, se hizo frecuente sólo a fines de los noventa: el *impeachment*. De esta forma, el autor indaga en lo ocurrido a seis presidentes que enfrentaron juicio político a partir de 1992 e intenta generalizar los factores que podrían haber incrementado las probabilidades de llegar a esta instancia:

las protestas, los escándalos o el apoyo legislativo. Este último punto es quizá el elemento que más se relaciona con la discusión que hemos llevado, principalmente porque incorpora juegos estratégicos de los legisladores que se apartan de las tradicionales negociaciones del Parlamento y se relacionan mucho más en cómo conseguir agentes leales para enfrentar el juicio político.

En Chile, la literatura académica también se hizo cargo del debate. En una primera instancia, algunos académicos observaban un excesivo poderío del Presidente de la República que contrastaba con la debilidad del Congreso, reduciendo así las instancias de adaptación funcional y provocando fuertes enfrentamientos entre ambos poderes (Valenzuela, 1996: 47). Incluso, estas visiones llegaban a intentar un replanteamiento de las estructuras institucionales del país, con el fin de repensar la idea de hacer un viraje hacia un sistema parlamentario.

Aunque esta idea tuvo muchos adeptos entre políticos e intelectuales –llegando incluso a organizarse coloquios muy concurridos en los años noventa– poco a poco el impulso volcó a redireccionar ese debate hacia las virtudes del presidencialismo. Sin embargo, ese viraje en la discusión no significó un relevamiento del Congreso, sino simplemente asentar que la estructura institucional chilena, es decir, los poderes del Presidente, contribuían a la previsibilidad, transparencia y accountability de los gobiernos (Shugart y Carey 1992, Lanzaro, 2001). Fue así como durante un largo periodo el foco de la investigación fue unidireccional, centrándose en los poderes proactivos y reactivos del Presidente y en cómo ellos influían en llevar la agenda legislativa en desmedro del Congreso.

En 2000, los trabajos comenzaron a incorporar las virtudes de la institución legislativa en el diseño de la ley. Siavelis (2000) –aún moderando su apreciación sobre la capacidad del legislativo– entendió que la actuación de los presidentes en Chile estaba lejos de ser unilateral, a pesar de que sobre ellos recaía gran parte del peso legislativo. La idea de un presidencialismo fuerte y un Congreso moderado, apuntaba a un ambiente de cooperación entre ambos poderes que ayudó al buen término de los gobiernos de Patricio Aylwin y Eduardo Frei (Siavelis, 2000), confirmando, en opinión de Siavelis, que “el éxito de las administraciones de Aylwin y Frei demostró que el presidencialismo pudo, en ciertas circunstancias, funcionar bien en Chile” (2000: 191).

Sin embargo, la lógica de cooperación entre poderes que ha observado la academia en el presidencialismo no parece coincidir con la opinión de los chilenos cuando

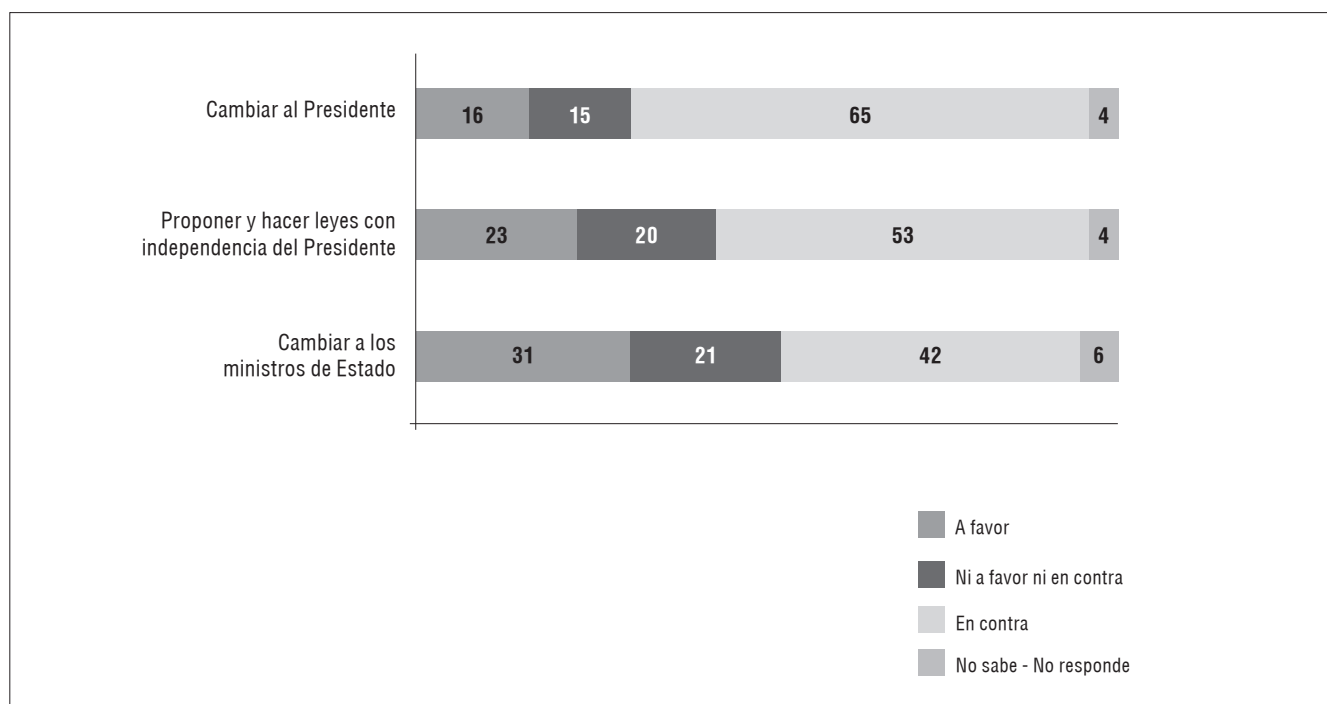
se ven enfrentados a preguntas relacionadas con este tema. Más allá de una opción por la forma de gobierno presidencial producto del funcionamiento coordinado y de cooperación que han tenido ambos poderes, las respuestas que arroja la Encuesta Nacional Bicentenario exhiben una fuerte motivación de rechazo de un poder con respecto al otro. En palabras simples, los ciudadanos prefieren el presidencialismo porque desconfían del Congreso. Este es un punto crucial, pues los encuestados estarían pensando dicotómicamente las funciones de ambos poderes, sin un análisis mayor respecto de la interacción de cada uno. No por nada, el 53% rechaza la facultad legislativa del Congreso con independencia del Presidente. El gráfico siguiente confirma esta afirmación, al demostrar la poca legitimidad del Congreso para intervenir, incluso, en sus propias decisiones de legislación.

Esta lógica también estaría primando en la determinación de los apoyos ciudadanos hacia las personas y las instituciones. Distintas encuestas muestran que, tanto

los partidos como quienes los conducen, obtienen paulatinamente una baja adhesión ciudadana. Los gobiernos, en cambio, a pesar de que son integrados por agentes de las propias colectividades, suelen tener altos índices de confianza y aprobación. A modo de ejemplo, mientras personajes como Juan Carlos Latorre, Camilo Escalona o Rodrigo Álvarez lograron una baja evaluación en la encuesta del Centro de Estudios Públicos, de octubre de 2009; Michelle Bachelet, Andrés Velasco y René Cortazar presentaron indicadores muy positivos.

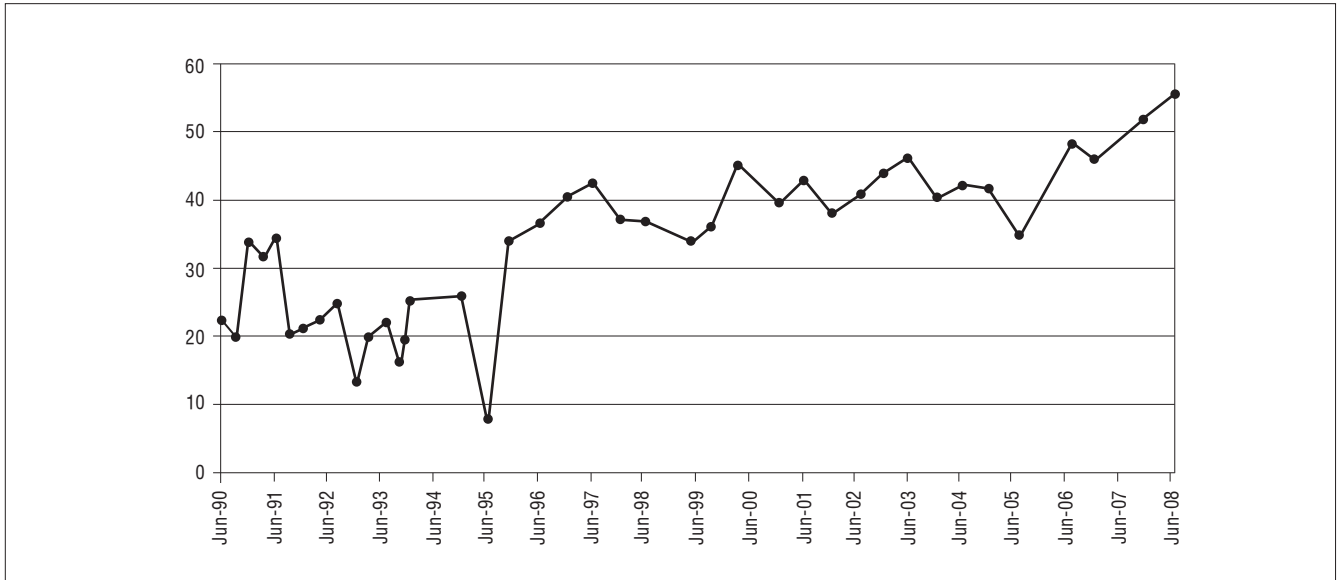
¿Qué se puede desprender de estos resultados? En primer lugar, que existe una fuerte escisión entre la actividad gubernamental y partidaria. Mientras la primera goza de tranquilidad, la segunda se encuentra en una fuerte crisis de legitimidad que redundará en desconfianza y rechazo. Dos datos parecen confirmar este escenario. El primero apunta al aumento de quienes no se identifican con algún partido político en Chile desde 1990 en adelante. El gráfico siguiente demuestra una línea de tendencia que supera el 50% de no identificación desde 2007.

Gráfico 1 | **Posición de los encuestados respecto de las atribuciones del Congreso**



Fuente: Encuesta Nacional Bicentenario Universidad Católica - Adimark.

Gráfico 2 | **Porcentaje de personas que no se identifica con los partidos**

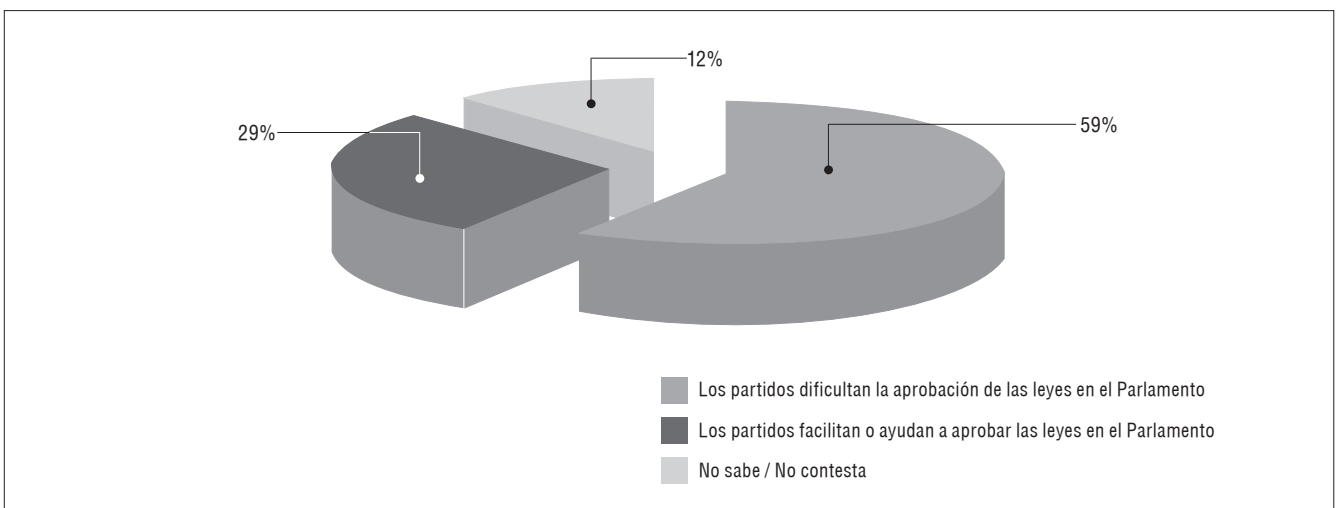


Fuente: Encuestas Centro de Estudios Públicos.

El segundo antecedente está relacionado con la pregunta sobre el rol de los partidos políticos en el Parlamento, incorporada en la encuesta del Consorcio del Centro de Estudios para la reforma electoral en 2008. Aquí, el

59% calificó a los partidos como entidades que entraban la aprobación de leyes en el Congreso, a pesar de que esta institución debiera ser, por esencia, el escenario principal de la acción partidaria.

Gráfico 3 | **Posición de los encuestados respecto del rol de los partidos en el Parlamento**



Fuente: Encuestas Consorcio de Centros de Estudios para la reforma electoral.

¿Qué consecuencias puede acarrear esta división de las percepciones entre lo que significa ser agente gobierno y agente partidario? Una buena respuesta se encuentra en Luna (2008), quien demuestra un problema en el sistema representativo que es necesario tomar en consideración. Para el autor, las faltas de confianza del nivel que presenta Chile podrían llevar, más temprano que tarde, a la generación de realineamientos partidarios que pueden ser problemáticos si no se realizan las acciones necesarias para subsanarlas. Luna entrega algunos escenarios posibles, entre los que se encuentra el colapso del sistema de partidos en torno a alternativas personalistas y anti partidos. Esto es lo que se vivió en Venezuela, a pesar del alto nivel de institucionalización que presentaba en la primera mitad de los noventa (Mainwaring y Scully, 1995). Otro camino que para el autor es necesario considerar es el de la muerte lenta, es decir, un debilitamiento paulatino de la legitimidad partidaria –cosa que ya se está viendo en múltiples encuestas– que impactaría sobre la calidad y gobernabilidad del sistema. En palabras de Luna (2008: 120): “En ausencia de transformaciones significativas, los partidos como instituciones representativas continuarán debilitándose, atentando inexorablemente contra la calidad de la democracia chilena”.

Los desafíos de reforma

¿Cuáles, entonces, son los desafíos de reforma? Hoy, avanzar hacia un sistema parlamentario parecería riesgoso, entendiendo la crisis de legitimidad de nuestros partidos y del Parlamento. En consecuencia, se creería más lógico progresar en el fortalecimiento de las instituciones que conforman el sistema de representación chileno dentro de un presidencialismo que, si bien ha funcionado relativamente, tiene problemas en mucho de sus componentes. Dos iniciativas parecieran tener un carácter urgente: la reforma a los partidos políticos y la inscripción automática y voto voluntario. Ambas ya se encuentran en tramitación legislativa, una más avanzada que la otra.

La necesidad de la primera se sostiene por la ya mencionada deslegitimación de las instituciones representativas. El 27 de mayo de 2008, el gobierno presentó ante el Congreso el proyecto de la nueva Ley Orgánica Constitucional de los Partidos Políticos. Uno de los principales objetivos de esta iniciativa fue romper con los vacíos de una regulación de más de veinte años de vigencia que –a pesar de algunas reformas– no había sido

capaz de adaptarse a los cambios políticos y sociales del país. Dos de las orientaciones más relevantes de este proyecto han tenido que ver no sólo con la disciplina de los representantes (órdenes de partido) en asuntos en que los principios, programa y línea política de la colectividad pueden llegar a verse comprometidos con el accionar parlamentario. También con el establecimiento de primarias para cargos de representación popular (alcaldes y parlamentarios), además de dejar a discreción de los partidos la selección de candidatos a Presidente y concejal. Sin embargo, a pesar de que estas reformas son un avance en pro de zanjar algunos puntos sobre la crisis de legitimidad de los partidos, aún parecen ser insuficientes. No prever sus externalidades podría llevar a consecuencias no deseables desde el punto de vista de los objetivos del proyecto y del buen funcionamiento del sistema político, en general, y de partidos, en particular. ¿Cuán contradictorias pueden ser las órdenes de partido en un sistema electoral, como el chileno, que privilegia la personalización de las candidaturas? ¿Lograrán las primarias zanjar los procesos de negociación de pactos y sub pactos para elegir candidatos? ¿Qué tan peligrosas pueden llegar a ser las órdenes de partido para conseguir acuerdos fuera de la coalición? Esas y otras preguntas quedan aún pendientes.

Respecto de la iniciativa de voto voluntario e inscripción automática, se mantienen las dudas sobre los verdaderos efectos que se producen en la estructura partidaria luego de la incorporación de nuevos electores. En cierto sentido, los nuevos votantes significan una suerte de flexibilización de la parrilla programática en pos de un mejor vínculo. Esta relación de adaptabilidad programática y nuevos electores, que pareciera presentarse fuertemente en los países latinoamericanos post-autoritarios, ha generado distintos caminos dependiendo de sus estructuras. Por ejemplo, si observamos dos sistemas de partidos institucionalizados, como Uruguay y Chile (Mainwaring y Scully, 1995) y, según las nuevas mediciones, con vínculos fuertemente programáticos, vemos cómo en uno (Uruguay) la baja adaptabilidad de las colectividades tradicionales hacia los nuevos electores fue castigada en la última elección presidencial, y en otro (Chile) –aún con este mismo fenómeno de congelamiento de la oferta– no se han generado partidos desafiantes que logren minar sus resultados electorales. Pues bien, la diferencia de estos dos caminos se podría explicar por los grados de incorporación de este nuevo electorado potencial. Desde mi punto de vista, la diferencia entre Uruguay (la inscripción y la votación son obligatorias) y

Chile (con voluntariedad en la inscripción y obligación en la votación) haría que mientras en el primero –cuyas tasas de tasas de participación de los nuevos votantes son altas– se produjo un cambio en la estructura partidaria, en el segundo –donde la participación de los nuevos potenciales electores es baja– este cambio no se registró. Así, es posible ensayar que los niveles de incorporación (o no) de los nuevos electores al proceso electoral podrían influir en los cambios (o congelamiento) de los sistemas de partidos. Si esto es así, el avance hacia una inscripción automática y voto voluntario podría tener consecuencias más que positivas en los partidos ante la necesidad de ir adaptándose a las diferentes demandas de los sectores más jóvenes de nuestra sociedad.

Para la discusión

Chile vive una paradoja importante. Mientras el trabajo del Ejecutivo es valorado fuertemente por las personas, la actividad legislativa avanza paulatinamente hacia una crisis de legitimidad. Esta dualidad se da principalmente por cómo los partidos han desarrollado su trabajo de representación. Múltiples autores han observado que la labor partidaria está cada vez más alejada en sus nexos con los electores, lo que podría desembocar en colapsos importantes en nuestro sistema. Siavelis (2009), por ejemplo, ha señalado que la estructura de la competencia post autoritaria ha conllevado a una política elitista que ve forzada una crisis generalizada de representación. De esta forma, prácticas como el cuoteo, el control de la élite en la selección de candidatos y la política electoral, están generando nuevos enclaves de la transición (Siavelis, 2009).

Pues bien, un avance en las reformas políticas parece necesario. Este progreso debería apuntar a fortalecer las instituciones partidarias, hacerlas más inclusivas y con una real democracia interna. Si esto no ocurre, veremos que esta división entre las labores de gobierno y las partidarias irá creciendo a puntos insalvables y peligrosos. Las experiencias en América Latina no han sido pocas respecto a este punto y si no se pone fin podríamos estar en el umbral de un desenlace no deseado. En definitiva, cada vez se hace más urgente, no sólo tomarle el pulso a la política, sino que desarrollar las acciones necesarias para un nuevo empuje de ella.

Referencias

- Altman, D.** 2000. The politics of coalition formation and survival in multiparty presidential democracies: The case of Uruguay 1989-1999. *Party politics* 6 (3): 259-283.
- Carey, J.** 2002. Parties, coalitions, and the Chilean Congress in the 1990s. En *Legislative politics in Latin America*, editado por S. Morgenstern y B. Nacif. Cambridge: Cambridge University press: 222-253.
- Chasqueti, D.** 2002. Democracia, multipartidismo y coaliciones: Evaluando la difícil combinación. *Lateinamerika Analysen* 3 (Oktober): 67-92.
- Cheibub, J., Przeworski, A. and Saiegh, S.** 2004. Government coalitions and legislative success under presidentialism and parliamentarism. *British Journal of Political Science* 34 (4): 565-587.
- Lanzaro, J.** 2001. Tipos de presidencialismo y modos de gobierno en América Latina. En *Tipos de presidencialismo y coaliciones políticas en América Latina*. Buenos Aires: CLACSO.
- Linz, J.** 1978. The breakdown of democratic regimes: crisis, breakdown and reequilibration. Baltimore: John Hopkins University press.
- Linz, J.** 1994. Democracy, presidential or parliamentary: Does it make a difference? In the failure of presidential democracy: the case of Latin America, editado por J. Linz y A. Valenzuela. Baltimore: John Hopkins University Press: 3-87.
- Luna, J.** 2008. Partidos políticos y sociedad en Chile. Trayectoria histórica y mutaciones recientes. En A. Fontaine et al "Reforma de los partidos políticos en Chile" Santiago, PNUD: 75-125.
- Mainwaring, Scott and Matthew Shugart (Ed.).** 1997. *Presidentialism and democracy in Latin America*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Mainwaring, S.** 1993. Presidentialism, multipartism, and democracy: The difficult combination. *Comparative political studies* 26 (4): 198-228.
- Morgenstern, Scott and Benito Nacif (Ed.).** 2002. *Legislative Politics in Latin America*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Morgenstern, S.** 2004. Patterns of legislative politics: Roll-Call voting in Latin America and the United States. Cambridge: Cambridge University Press.
- Pérez-Liñán, A.** 2007. *Presidential impeachment and the new political instability in Latin America*. New York: Cambridge University Press.

Shugart, M. y Carey, J. 1992. Presidents and assemblies: Constitutional design and electoral dynamics. Cambridge: Cambridge University Press.

Siavelis, Peter M. y Scott Morgenstern (Ed.). 2008. Pathways to power: Political recruitment and candidate selection in Latin America. University Park: Pennsylvania State University Press.

Siavelis, P. 2000. The President and Congress in postauthoritarian Chile. Pennsylvania: The Pennsylvania State University press.

Siavelis, P. 2002. Exaggerated presidentialism and moderate presidents: Executive- legislative relations in Chile. En Legislative politics in Latin America, editado por S. Morgenstern y B. Nacif. Cambridge: Cambridge University Press, 79-113.

Siavelis, P. 2009 Enclaves de la transición y democracia chilena. Revista de Ciencia Política 29 (1): 3-21.

Valenzuela, A. 1996. Orígenes y características del sistema de partidos en Chile: Proposición para un gobierno parlamentario. Estudios Públicos 64. (Primavera): 2-71.

Familia y fecundidad

RODRIGO CERDA

Académico del Instituto de Economía UC

Lo que muestra la encuesta

Uno de los temas que trata la Encuesta Nacional Bicentenario en su última versión es el de la fecundidad en las familias chilenas. En esta presentación trato de destacar y discutir lo que, a mi juicio, son los puntos más importantes que surgen de esta nueva entrega. En primer lugar, de acuerdo a los datos elaborados por el Instituto Nacional de Estadísticas de Chile (INE), la tasa global de fecundidad, medida como el número promedio de hijos que ha tenido cada mujer al concluir su período fértil, disminuyó desde 5.4 hijos en los años 1962-1963, hasta 1.9 hijos en 2004¹. La Encuesta Nacional Bicentenario ratifica esta tendencia. De hecho, nos indica que hoy las mujeres mayores de 40 años (con su ciclo reproductivo completo) tienen en promedio tres hijos, mientras que sus madres tuvieron cerca de 6.2. Es decir, en una sola generación hemos observado un violento cambio en las decisiones de fecundidad de las mujeres. Ésta es una transformación muy rápida que, como discutiremos más adelante, debería tener múltiples implicancias para la sociedad chilena en un futuro relativamente cercano.

Antes de entrar en esta discusión, es necesario analizar otros resultados obtenidos a partir de la encuesta en materias de fecundidad y familia.

Sin duda, uno de ellos es que los hogares han sufrido profundos cambios en los últimos años. Tal como lo ilustra el sondeo, las familias tienden a ser más pequeñas. De hecho, cerca de la mitad de las mujeres que en la actualidad tienen un solo hijo no planean tener más niños y, de las mujeres con dos hijos, sólo un 14% desea otro. Las razones por las que ocurre este fenómeno pueden ser múltiples. Por ejemplo, transformaciones culturales, como cambios en los hábitos de consumo de los chilenos, en general, y de las parejas, en particular, que pueden llevar

a posponer el momento de tener el primer hijo con la finalidad de disfrutar las nuevas posibilidades de consumo. La tabla 1 muestra cierta evidencia en el sentido de retrasar el nacimiento de los hijos. Como puede observarse, el fenómeno es particularmente importante en el caso de mujeres casadas, quienes llevan su edad promedio para tener su primer hijo desde cerca de 23 años en los años sesenta, setenta y ochenta, a cerca de 26 años en 2003.

Tabla 1 | Edad de la madre a la fecha del nacimiento del primer hijo, 1960-2003

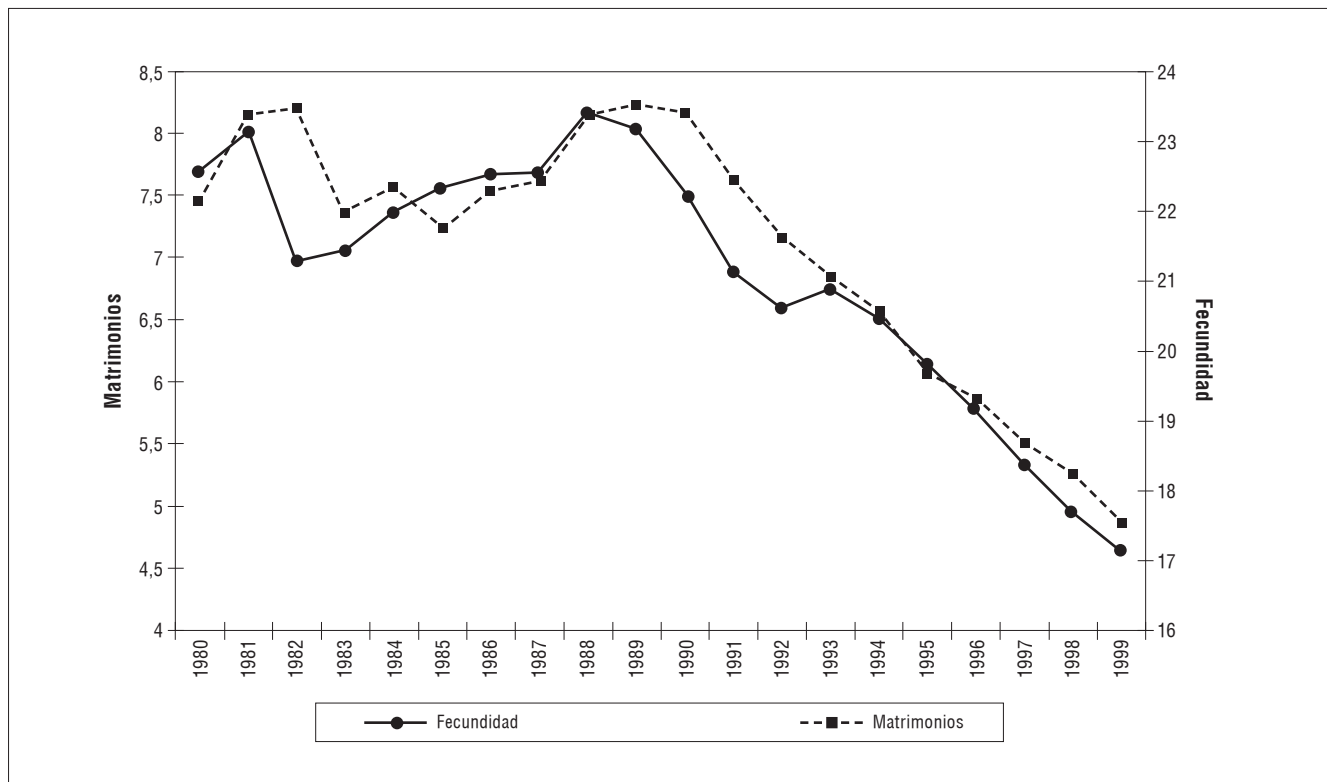
	Total	Casadas	No casadas
1960	23.7	23.5	21.4
1970	22.9	22.8	21.0
1980	22.6	22.8	21.7
1990	23.2	23.9	21.8
1995	23.2	24.3	21.8
2000	23.3	25.5	21.7
2003	23.3	26.5	22.0

Fuente: Larrañaga (2006).

Otro cambio social relevante es la significativa disminución en la tasa de nupcialidad entre los chilenos: el número de matrimonios ha caído desde algo más de siete por cada mil habitantes, a principios de los setenta, hasta cerca de 3.6 en 2003. Este es un patrón que tiende a coincidir con la evolución de la tasa de natalidad. Así puede observarse en el gráfico 1 que muestra la trayectoria de la tasa de nupcialidad, definida como el número de matrimonios por cada mil habitantes, y la tasa de natalidad, entendida como la totalidad de nacidos vivos por cada mil habitantes, en el periodo 1980-1999. La evolución común en ambas variables tiende a ser muy sugerente.

¹ Al respecto ver INE (2006).

Gráfico 1 | Evolución de tasa de nupcialidad y natalidad 1980-1999



Fuente: INE (2006).

Sin perjuicio de que estos factores pueden ser determinantes de la disminución de la tasa de fecundidad, la Encuesta Nacional Bicentenario nos muestra que los aspectos socioeconómicos son otro indicador que explicarían una parte importante de esa disminución, lo que tiende a coincidir con evidencia reportada en estudios para el caso de Chile (ver Larrañaga 2006, Cerda 2006, 2007 y 2008). De hecho, cuando se le pregunta a distintas mujeres cuáles fueron las razones para decidir no tener más hijos, las respuestas más recurrentes son (1) que tener niños hace más difícil trabajar, (2) que los hijos son difíciles de mantener, (3) que criar a los niños conlleva muchas preocupaciones y problemas, y (4) que mi casa no es lo suficientemente espaciosa para tener una familia numerosa. Más atrás, y con bastante menos importancia, aparecen afirmaciones como (1) no estoy casado o viviendo con una pareja estable, (2) no estoy seguro de contar con mi pareja por mucho tiempo y (3) mi pareja se opone a tener otro hijo. De esta forma, de las cuatro razones principales para no tener niños, tres de ellas se refieren a factores socioeconómicos.

El primer aspecto socioeconómico relevante –“tener niños hace más difícil que la mujer trabaje”– nos muestra una tensión evidente entre las funciones de madre con las de mujer trabajadora y participante del mercado laboral. Este factor no es para nada sorprendente cuando se analizan las tendencias ocupacionales y educacionales de las chilenas. Las tablas 2 y 3 separan al grupo de entre 35 y 39 años en cuatro niveles educacionales en cada año. Mientras la primera columna corresponde a mujeres con menores niveles de educación, la cuarta representa a quienes cuentan con más alta formación. Si se compara con lo que ocurría hace cincuenta años, los datos muestran que todos los grupos han aumentado considerablemente su educación al 2002. Más interesante aún, de la tabla 3 se desprende que hoy cada vez menos mujeres se declaran dueñas de casa y, por lo tanto, tienden a salir de sus hogares en busca de fuentes laborales a medida que aumentan su nivel de educación, tal como sugiere la tabla 2. Estos cuadros, entonces, reflejan que cuando las mujeres mejoran su formación (impulsadas por las políticas públicas y el desarrollo económico de los últimos cuarenta años en nuestro país) aprovechan las oportunidades que se les abre en el mercado laboral.

Tabla 2 | **Años de escolaridad promedio**

Cohorte 35-39 en año:	I	II	III	IV
1960	0.6	3.79	6.2	9.99
1970	1.58	5.23	7.6	11.1
1982	2.35	5.73	8.57	12.88
1992	4.16	8.06	11.25	15.7
2002	5.67	9.8	12.3	15.7

Fuente: Cálculos a partir de extractos de los censos de 1960, 1970, 1982, 1992, 2002, disponibles en el Minnesota Population Center. Tabla originalmente presentada en Cerda (2007).

Tabla 3 | **Porcentaje mujeres dueñas de casa, Chile 1960-2002**

Cohorte 35-39 en año:	I	II	III	IV
1960	84.1	80.9	80	65.2
1970	82.2	78.5	73.9	57.1
1982	76.2	75.2	68	40
1992	73.5	69.8	55.8	22.6
2002	65.1	59	42.2	23.1

Fuente: Cálculos a partir de extractos de los censos de 1960, 1970, 1982, 1992, 2002, disponibles en el Minnesota Population Center. Tabla originalmente presentada en Cerda (2007).

La tabla 4 muestra datos de fecundidad para estos mismos grupos. Resulta notable que las mujeres con mayores niveles de educación comienzan, ya en 1960, a trabajar más y tener menos hijos, algo que ocurre con las chilenas con menores niveles de formación sólo desde 1982, cuando empiezan a aumentar sus años de educación y a trabajar fuera de sus hogares. La tabla 4 también muestra otra cosa: mientras las madres de mayor nivel educacional tienen, ya en 2002, menos de dos hijos en promedio, la transición hacia familias con menos niños ha sido bastante más tardía que quienes tienen

menos formación. Esto sugiere que la disminución en las tasas de fecundidad que hoy observamos se concentra en los grupos con menores niveles de educación y más atrasados en su condición socioeconómica.

Tabla 4 | **Número de hijos, Chile 1960-2002**

Cohorte 35-39 en año:	I	II	III	IV
1960	4.73	4.2	3.02	2.55
1970	5.63	4.59	3.69	3.14
1982	4.07	3.3	2.74	2.16
1992	3.19	2.73	2.25	1.97
2002	2.67	2.42	2.01	1.78

Fuente: Cálculos a partir de extractos de los censos de 1960, 1970, 1982, 1992, 2002 disponibles en el Minnesota Population Center. Tabla originalmente presentada en Cerda (2007).

La segunda razón que indicaban las mujeres para no tener más hijos era que “los niños son difíciles de mantener”. Esta es una preocupación de muchos padres que parece tener cierto sustento en los datos. La tabla 5 muestra los resultados de la Encuesta de Protección Social (EPS) 2002, en que una de las preguntas era cuánto gastaban en la educación de sus hijos (en el caso de hogares con al menos un niño). Si bien hay muchas familias que no incurren en costos educacionales debido a los programas impulsados por el Estado y algunos privados (36.3% no paga colegiatura, 18.1% no cancela matrícula, 9% no paga útiles y 52.9% no cancela movilización de ningún tipo hacia el colegio), el gasto promedio anual de estos hogares en la educación de sus hijos era aproximadamente \$467 mil en 2002. Esta cifra es bastante significativa si se considera que el ingreso autónomo promedio mensual de una familia en noviembre de 2003 era aproximadamente de \$528 mil, de acuerdo a la encuesta CASEN 2003 (Mideplan, 2004). Es decir, el gasto en educación de los hijos corresponde a cerca de un mes de ingresos de un hogar promedio de Chile. Si duda, una cifra bastante significativa.

Tabla 5 | **Gasto anual en hijos, \$2002**

	Colegiaturas	Matrículas	Útiles	Movilización	Total
% Gasto cero	36.3	18.1	8.97	52.9	-
Gasto promedio	230.068	38.137	69.147	53.194	467.267

Fuente: Cálculos a partir de EPS 2002. Tabla originalmente presentada en Cerda (2007).

Tabla 6 | Costos de gastos en bienes y servicios educacionales

	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995
MATRÍCULA ESCOLAR	2.312	3.474	6.158	8.715	12.213	18.395	25.153
MENSUALIDAD ESCOLAR	5.680	8.586	13.462	19.308	26.867	38.085	48.834
CUOTA DE CENTRO DE PADRES	563	829	1.305	1.946	3.130	4.881	6.342
MATRÍCULA UNIVERSITARIA	6.046	9.275	14.760	21.283	27.816	35.765	42.756
MENSUALIDAD UNIVERSITARIA	9.119	13.249	20.448	30.314	41.532	55.484	67.567
TEXTOS ESCOLARES	435	691	1.199	1.741	2.391	3.197	3.922
CUADERNO CHICO	32	48	76	100	125	151	183
CUADERNO UNIVERSITARIO	107	163	251	338	424	500	613
	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002
MATRÍCULA ESCOLAR	31.270	37.265	46.799	75.749	83.674	92.348	99.615
MENSUALIDAD ESCOLAR	58.285	70.212	85.490	94.356	105.179	115.677	125.473
CUOTA DE CENTRO DE PADRES	8.035	9.375	11.157	9.118	9.887	10.723	11.423
MATRÍCULA UNIVERSITARIA	60.575	73.651	83.670	76.633	86.327	95.934	105.226
MENSUALIDAD UNIVERSITARIA	91.138	103.577	124.757	134.855	150.041	168.779	184.414
TEXTOS ESCOLARES	4.584	5.347	6.300	8.596	9.158	9.578	10.943
CUADERNO CHICO	221	247	270	255	277	292	307
CUADERNO UNIVERSITARIO	690	719	750	706	773	825	82

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas. Tabla originalmente presentada en Cerda (2007).

La tabla 6 muestra cómo han evolucionado los costos de bienes y servicios educacionales, de acuerdo al INE. Las cifras se muestran en pesos del año 2002 para poder compararlas en el tiempo y eliminar el efecto de la inflación. Es decir, cuando los costos suben, éstos representan aumentos mayores al del resto de los precios de los bienes de la economía.

Resulta sorprendente el aumento de costos de algunos ítems, por ejemplo la mensualidad universitaria, que llega a casi \$200 mil en 2002, pero que en 1989 (en pesos del año 2002) representaba sólo un 5% de esa cifra. La matrícula escolar muestra algo parecido, siendo de cerca de \$100 mil en 2002, mientras en 1989 era sólo un 2% de ese valor.

Estos datos reflejan dos cosas. Primero, que criar a los hijos implica un costo económico considerable para las familias chilenas. Segundo, que estos gastos han ido en aumento en la última década, lo que acentúa el problema, sobre todo si se considera que los datos mostrados reflejan sólo los costos educacionales, cuando obviamente criar a los hijos supone varios otros ítems –como salud, recreación o vivienda– que hacen el panorama aún más complicado.

En este contexto, en que los factores socioeconómicos pasan a ser un tema clave en la decisión de tener hijos, emerge un elemento adicional desde la Encuesta Nacional Bicentenario: una sensación bastante generalizada de que la sociedad chilena no apoya a las mujeres para tener niños.

Si bien en el sondeo no se ahonda en lo que se entiende por “apoyo”, sí podemos especular al respecto. En primer lugar, de las respuestas que hemos analizado con anterioridad parece existir cierta tensión entre las mujeres para compatibilizar su roles de madre y trabajadora, lo que no es sorprendente en la medida en que las jornadas, tanto para hombres o mujeres, son generalmente de 8 o 9 horas y 5 o 6 veces a la semana. Esta característica del mercado laboral, y por lo tanto de las oportunidades que ofrece nuestra sociedad en este ámbito, es una barrera difícil de soslayar, sin que existan diferencias claras, comparables con la situación de los hombres, que ayuden en el tema de la maternidad.

En segundo lugar, y en un asunto generalizado tanto para mujeres como hombres, las posibilidades educacionales que ofrece el sector público, si bien son amplias en términos de cobertura, tienden a ser bajas desde el punto de vista de la calidad. Este es un factor no menor si se

considera que la encuesta arroja una preocupación importante de las familias por la excelencia de los colegios a los que asisten sus hijos. Así, esta baja calidad educativa, sobre todo del sector público, pasa a ser un nuevo obstáculo para tener familias numerosas, en la medida en que los padres se dan cuenta de que requieren incorporar dentro de su presupuesto gastos suplementarios en educación si desean que sus hijos asistan a instituciones privadas o subvencionadas de mayor calidad.

Perspectivas y políticas públicas

¿Cómo enfrentar esta disminución tan acentuada de la fecundidad en Chile? Al final del día ésta es la pregunta que parece ser más relevante. No obstante, debería ser reformulada a una como la siguiente: ¿Cómo enfrentamos la acentuada transición demográfica por la que atraviesa nuestro país?

Debemos partir reconociendo que el cambio social que se registra por las modificaciones en las tasas de fecundidad va acompañado de aumentos considerables en la esperanza de vida, lo que lleva a que nuestro país se encuentre en un claro y acelerado proceso de envejecimiento. De esta forma, estamos frente a un conjunto de transformaciones demográficas que se interrelacionan, aunque el envejecimiento de nuestra población debe ser uno de los más profundos que atraviesa nuestra sociedad y que nos plantea múltiples desafíos.

En primer lugar, el sector salud debe adaptarse a demandas diferentes que van a estar mucho más centradas en las necesidades de los adultos mayores. Esto implica requerimientos de infraestructura, especialistas y de atención muy distintos de los que actualmente observamos. La creciente preocupación por la hipertensión en los últimos años es un claro ejemplo de las nuevas urgencias en esta área.

En segundo lugar, deberemos observar una reconversión en el sector educacional. Efectivamente, la disminución en la tasa de fecundidad dejará muchos asientos vacíos en el mediano plazo en los colegios de nuestro país. ¿Cómo enfrentarlo? ¿Cerrando colegios? ¿Teniendo cursos más pequeños? Esas son preguntas para responder en el mediano plazo. Lo interesante es que se trata de temas que involucran de forma fundamental al sector público, dado que éste es uno de los mayores proveedores de estos servicios (tanto en educación como en salud). Como el ámbito público tiene una inercia y tamaño considerables, estas tendencias deberían considerarse en su planificación estratégica en un horizonte de mediano plazo.

En tercer lugar, y como se plantea en Cerda (2007, 2008), estos cambios también provocan desafíos en materia económica, especialmente en el mercado laboral. Esto, a raíz de que la disminución en la tasa de natalidad generará un cuello de botella en el aumento de la oferta laboral futura y, por lo tanto, una potencial traba al crecimiento económico en el mediano plazo. Este punto también lleva a pensar en un aumento de corrientes migratorias de ciudadanos de países vecinos con situación económica más desventajosa, que encontrarán en Chile oportunidades de trabajo al disminuir aquí la oferta interna de trabajadores.

Finalmente, vale la pena volver sobre la pregunta con la que iniciaba el párrafo anterior: ¿Cómo enfrentar esta disminución tan acentuada de la fecundidad en Chile? No somos el primer país que pasa por este tipo de situaciones, por lo que existe cierta evidencia en relación a si es posible implementar políticas públicas que puedan revertir la tendencia a la baja en las tasas de fecundidad.

Lo primero a resaltar es que existe un amplio espectro de políticas públicas utilizadas en el mundo –una discusión más extensa puede encontrarse en Kohler, Billari y Ortega (2006) y Sleebos (2003)– entre las que se encuentran incentivos económicos como:

- Transferencias monetarias periódicas, usualmente por hijo y pagadas a los padres.
- Pagos, por una sola vez, habitualmente al momento del nacimiento de los hijos.
- Disminución o devolución de impuestos dependiendo de la presencia de hijos en el hogar.
- Entrega de bienes y servicios de forma gratuita o con descuentos, como por ejemplo, educación, atención médica u odontológica y recreación.
- Subsidios a la vivienda, incluyendo reducción o gratuidad de dividendos hipotecarios.

Un segundo tipo de políticas públicas, orientado a entregar incentivos a la fecundidad, es la *compatibilización del trabajo y la familia*. Por ejemplo:

- Políticas de postnatal, tanto para padres como madres, incluyendo el derecho a retornar al trabajo que se tenía antes de que naciera el hijo.
- Cuidado del hijo, abarcando la entrega o el subsidio para contratar ayuda, como parte de las políticas que buscan incentivar la relación entre empleo y familia. Esta iniciativa se aplica, incluso, para personas que no se encuentren trabajando.

- Horarios flexibles en el trabajo y permisos para ausentarse en caso de necesidad familiar.
- Política de no discriminación a la mujer y de igualdad de tratamiento a los trabajadores, sin importar su sexo.

Finalmente, un tercer grupo de políticas se relaciona con aspectos generales con miras a *facilitar la crianza de los hijos*. Entre ellas:

- Desarrollo de actitudes sociales positivas hacia los niños y la paternidad, incluyendo un mensaje acerca de lo necesaria que resulta la paternidad e indicando que la sociedad debe ayudar a fomentarla.
- Incentivos a la formación de matrimonios y relaciones estables, entre ellos, subsidios de vivienda para recién casados o distintas formas de apoyo matrimonial, como consejerías.
- Ambiente amigable para los niños, lo que incluye seguridad en los vecindarios, habilitación de áreas verdes para recreación y deporte, y de espacios recreativos en general.

Algunas de estas medidas ya están siendo implementadas, al menos parcialmente en Chile, como el postnatal para las mujeres, los subsidios a la vivienda, la gratuidad en educación y salud, y el cuidado de menores a través de la política de salas cunas, esta última recientemente puesta en marcha en el país. Sin embargo, existen varias otras que aún están lejos de ser aplicadas. Sin perjuicio de esto, si la autoridad desea poner en práctica algunas de estas medidas, debería partir con aquéllas que sean más efectivas. ¿Qué nos dice la evidencia internacional acerca de este punto? De acuerdo a la revisión de varios trabajos realizada por Sleebos (2003), las mejores políticas son las que contribuyen a compatibilizar trabajo y familia. Entre éstas destacan las que permiten e incentivan el trabajo part time y de tiempo flexible, mientras que otras, que típicamente se proponen, como la entrega de subsidios directos por hijo, permiten aumentar la fecundidad, pero su efecto tiende a ser menor. Las iniciativas de disminución y/o devolución de impuestos han mostrado un efecto positivo, aunque moderado, sobre la tasa de fecundidad en EE.UU. y Canadá.

De acuerdo a esta evidencia, si se busca incentivar la tasa de fecundidad, las políticas laborales son fundamentales. Esta es un área donde claramente Chile puede mejorar y en que las iniciativas de subsidios directos deberían ser sólo secundarias, en la medida que su costo puede llegar a ser muy significativo y su efectividad, menor.

¿Qué otras acciones pueden ser importantes? A la luz de los resultados de la Encuesta Nacional Bicentenario, la calidad de la educación es un asunto clave, de manera que toda política que mejore significativamente la oferta de los colegios públicos-municipalizados en este sentido debería afectar al alza la tasa de fecundidad. Alternativamente, la disminución de la base imponible en el global complementario de las familias debido a gastos educacionales también puede ser efectiva. En el caso de los hogares que no paguen impuestos por medio del global complementario porque estén exentas, la devolución parcial o total también parece ser un instrumento potente.

Pero no sólo la calidad educacional es relevante de acuerdo a la encuesta, sino también la vivienda. Si bien hoy existen subsidios considerables (en algunos casos muy grandes) para la adquisición de casas, más que un tema de acceso, el mejoramiento de la calidad de las construcciones y de los espacios de éstas también puede ser parte de un paquete de políticas públicas que incentive la fecundidad.

Referencias

- Cerda, R.** (2006). ¿Dónde están los niños? Determinantes socioeconómicos de la tasa de fertilidad en Chile. Investigaciones para que nuestros pueblos tengan vida. CELAM, académicos UC. Santiago. Pontificia Universidad Católica de Chile.
- Cerda, R.** (2007). Cambios demográficos: Desafíos y oportunidades de un nuevo escenario. Serie Temas de la Agenda Pública N° 11. Vicerrectoría de Comunicaciones y Asuntos Públicos. Pontificia Universidad Católica de Chile.
- Cerda, R.** (2008). Cambios demográficos y sus impactos en Chile. Revista del Centro de Estudios Públicos N° 110, 89-163.
- Instituto Nacional de Estadísticas.** (2006). Fecundidad en Chile, situación reciente. Santiago, Chile.
- Kohler, H-P., Billari, F. and Ortega, J.** (2006). Low fertility in Europe: Causes, implications and policy options en F.R. Harris (Ed.) The baby bust: Who will do the work? Who will pay the taxes? Lanham, MD: Rowman & Littlefield Publishers, 48-109.
- Larrañaga, O.** (2006). Fertilidad en Chile, 1960-2003 en Samuel Valenzuela, Eugenio Tironi y Timothy Scully (eds): El eslabón perdido. Familia, modernización y bienestar en Chile. Editorial Taurus.
- Sleebo, J.** (2003). Low fertility rates in OECD countries: Facts and policy responses. OECD Social Employment and Migration Working Papers N° 15.

Comentario

ESPERANZA CUETO

Presidenta de ComunidadMujer

¿Qué hay detrás de la caída de la fecundidad en Chile?

Nuestro país atraviesa un proceso de transición demográfica que se ha traducido en familias, en promedio, más pequeñas de lo que se acostumbraba a ver en otras décadas. Este fenómeno evidencia una profunda e inédita transformación del contexto en el cual se desarrolla la maternidad y la paternidad en Chile. Los resultados de la última Encuesta Nacional Bicentenario, de la Universidad Católica y Adimark, dan cuenta de este fenómeno. Cae la cantidad de hijos tenidos y deseados: el 53% de las mujeres con un solo niño no planea tener más. Y de las que sí quieren tener más, un 60% se queda con dos.

Entre los hechos de las últimas décadas con mayor repercusión en esta realidad, consideramos de enorme relevancia el ingreso femenino al mercado laboral y su impacto en el modelo tradicional de familia. Hoy las mujeres exhiben tasas de educación iguales o incluso mayores que los hombres. Para esas generaciones el proyecto de vida ya no está centrado solamente en ser madres, sino que adquiere otra dimensión: la de la realización personal.

Al mismo tiempo, vemos que se produce una crisis del arquetipo de organización familiar: la habitual, con roles y responsabilidades claramente delimitados, es decir, padre proveedor y madre dedicada a tareas domésticas, se ha modificado en esencia. Los hogares pasaron de una estructura arraigada en la jefatura masculina a una con mayor diversidad que comprende un número notable de hogares donde ambos cónyuges aportan ingresos, mientras que otros son monoparentales. Dentro de este último grupo sobresalen aquellas familias que presentan jefatura femenina. En efecto, según estadísticas preliminares del estudio Voz de Mujer 2010 de ComunidadMujer, un 23% de los hogares donde vive al menos un me-

nor de 18 años es monoparental. De ellos, el 68% está a cargo de una mujer.

En particular, las familias encabezadas por mujeres son las que requieren más atención desde las políticas públicas, dado que diversos estudios demuestran que se encuentran en una situación de mayor vulnerabilidad frente a la pobreza. Así, la Encuesta Casen 2006 muestra que, en noviembre de ese año, un 14,1% de los hogares liderados por una mujer se encontraba en situación de pobreza (en el caso de las casas con jefatura masculina ese porcentaje se sitúa en 10%). Mientras tanto, la incidencia de la indigencia entre las familias a cargo de una mujer duplicaba a la de los hogares cuyo jefe era un hombre (4,1%, y 2,1% respectivamente). Analizar y actuar sobre esta realidad desde la perspectiva del diseño y la evaluación de políticas públicas es extremadamente pertinente.

Estas nuevas familias, tanto aquellas donde ambos cónyuges trabajan como las monoparentales, claramente optan por tener menos hijos para educarlos mejor, ofrecerles más oportunidades y una mejor calidad de vida. La Encuesta Nacional Bicentenario refleja que el 77% de las personas consultadas, ya sean hombres o mujeres, cree que es mejor tener pocos hijos para darles una educación de calidad. Asimismo, declaran mayoritariamente que hoy es “difícil mantener varios niños”.

Mujer, trabajo y corresponsabilidad

En este contexto, donde la restricción económica ha pasado a ser determinante en la planificación familiar, el hecho de que la mujer trabaje fuera del hogar y sume su ingreso al presupuesto familiar se ha convertido en un asunto central. Sin embargo, este fenómeno no está libre de dificultades. Por el contrario, las mujeres siguen reconociendo de manera mayoritaria lo conflictivo que es compatibilizar las tareas domésticas y el cuidado de niños, adultos mayores y personas con discapacidad, con el trabajo. Esta tensión se ve reflejada en la Encuesta Nacional Bicentenario y también en otros estudios, como

el Barómetro Mujer y Trabajo 2007¹, donde un 60% de las consultadas (mujeres activas del Gran Santiago) declara realizar siempre o casi siempre tareas domésticas y de cuidado de los hijos. Otro estudio –Barómetro², realizado a mujeres inactivas del Gran Santiago– aporta información de relevancia: un 69% señala no trabajar remuneradamente porque “no puede”, cifra que aumenta a 80% para los deciles de más bajos ingresos.

En los hechos, vemos que el conflicto se fundamenta en la división del trabajo en función del sexo, que aún prevalece en esta sociedad. La institucionalización de este paradigma tradicional se refleja en que las mujeres que trabajan enfrentan una doble jornada laboral y asumen los costos de contratación asociados a la maternidad. Mientras, las que están fuera del mercado laboral, ven sus oportunidades de acceder a la economía formal bastante disminuidas.

Ante este panorama, evitar la reproducción de estas desventajas y brechas pasa por adoptar una perspectiva de género en el diseño e implementación de las políticas públicas. Para continuar mejorando la situación de la mujer chilena es indispensable evaluar cómo cada medida la impactará en sus intereses y posibilidades futuras. Por lo tanto, se debe entender que la maternidad no es una responsabilidad exclusiva de la mujer, sino también del hombre. La renovación generacional, el traer hijos al mundo, es un valor social al que debemos hacer frente todos solidariamente. Si las funciones maternas y paternas tradicionales están siendo interpeladas, entonces, debemos abrirnos a un nuevo paradigma: “la corresponsabilidad”.

Lo anterior significa incorporar una visión más amplia en el reparto de roles que considere, por una lado, que la mujer pueda realizarse plenamente en todos los campos, sin que lo doméstico sea una carga y la maternidad, un motivo para excluirla o negarle espacios de participación y oportunidades. Por otro, que el hombre intervenga activamente en la crianza de sus hijos, compartiendo de manera equitativa las tareas de cuidado. Esto también implica que esa nueva división de roles sea reconocida y apoyada por las empresas y el Estado.

Dar a las familias chilenas la oportunidad de realizarse y de educar a sus hijos con calidad, incorporando esta visión de la corresponsabilidad en el desarrollo de las políticas públicas, probablemente logre devolverles la confianza para planificar su futuro sin restricciones.

Políticas públicas para las nuevas familias

En cuanto al diseño de las encuestas, estudios y diagnósticos, que aportan información valiosa para la proyección de políticas públicas, es recomendable que consideren la perspectiva de género. La Encuesta Nacional Bicentenario aborda una serie de cambios significativos que enfrenta la sociedad chilena, entre ellos, caída de la tasa natalidad, disminución de los hijos nacidos dentro del matrimonio, aumento de las madres solteras y de los divorcios. No obstante, en ese escenario de transformaciones resulta insuficiente seguir preguntándole sólo a las mujeres cuántos hijos tienen o desean tener.

En ComunidadMujer observamos con interés cómo algunas investigaciones extranjeras comienzan a incorporar una visión más amplia de los roles paterno y materno que reflejan el tránsito de la mujer desde la esfera privada hacia la pública, y el del hombre en sentido inverso. Por ejemplo, en un reciente estudio aparecido en el *Journal of Family Issues* se exploran decisiones de procreación tanto de mujeres como de hombres³. Asimismo, en otra investigación publicada en la revista *Social Science & Medicine* se analizan los efectos psicológicos de los embarazos no deseados sobre hombres y mujeres⁴.

En ese marco, en que a nivel internacional se abre la discusión sobre familia y reproducción a mujeres y hombres, podría pensarse que también en Chile ha llegado la hora, por ejemplo, de comenzar a preguntarle a las parejas de esas mujeres encuestadas cuántos hijos desean tener para los efectos de analizar fenómenos sociales tan complejos desde una dimensión integral.

En este sentido, es un aporte de la Encuesta Nacional Bicentenario consultar a toda la muestra con hijos (hombres y mujeres) sobre las razones para no tener más niños. Cabe destacar que el 53% argumenta para

1 ComunidadMujer, Datavoz y OIT. Encuesta realizada en 2007.

2 ComunidadMujer, Datavoz y OIT. Encuesta realizada en 2008.

3 Single mothers, single fathers: Gender differences in fertility after a nonmarital birth. *Journal of Family Issues*, 2009.

4 Mental health consequences of unintended childlessness and unplanned births: Gender differences and life course dynamics; *Social Science & Medicine*, 2008.

ello que los hijos dificultan que la mujer trabaje. Esta respuesta nos pone en la disyuntiva de plantearnos cómo dar a esas familias la oportunidad de desarrollarse, incorporando de lleno el enorme potencial de las mujeres y permitiendo que la maternidad deje de ser una barrera para desenvolverse en el mercado laboral.

Chile tiene mucho que hacer en este sentido. Aunque celebramos la admisión de nuestro país a la OCDE, somos el segundo con la más baja tasa de participación laboral femenina de este grupo de 35 naciones (superamos sólo a Turquía). De hecho, la presencia de las mujeres en el mercado del trabajo chileno, si bien está en aumento, aún es sustancialmente menor al promedio latinoamericano (40% versus un 53%).

Efectivamente, que la mujer participe en mayor proporción en el mundo laboral, más allá de la repercusión que esto tiene en la natalidad, es un desafío importante para responder a los anhelos de las nuevas familias que se ven retratadas en la Encuesta Nacional Bicentenario. Se trata de hogares que optan por tener menos hijos para educarlos mejor y ofrecerles más oportunidades. El desafío, entonces, de las políticas públicas es dar respuesta a esas demandas y poner en el centro del análisis político y académico la situación de los hogares de menores ingresos que son más propensas a sub invertir en la educación de sus hijos. Si los niños son el capital humano del futuro, debemos entender que son responsabilidad de toda la sociedad y que las decisiones individuales o públicas relativas a su desarrollo tendrán efectos en todos nosotros.

Referencias

ComunidadMujer, Datavoz y OIT. 2007. Encuesta.

ComunidadMujer, Datavoz y OIT. 2007. Encuesta.

Guzzo, K. and Hayford, S. 2009. Single mothers, single fathers: Gender differences in fertility after a nonmarital birth, *Journal of Family Issues*.

Maximova, K. and Quesnel-Vallée, A. 2008. Mental health consequences of unintended childlessness and unplanned births: Gender differences and life course dynamics, *Social Science & Medicine*.

Movilidad social y el dilema de más o menos Estado

Opinión pública y los determinantes de la pobreza y la riqueza en Chile*

FLORENCIA TORCHE

Académica del Instituto de Sociología UC

Sabemos mucho sobre la magnitud de la pobreza y la desigualdad del ingreso en Chile, pero sabemos menos de las percepciones acerca de las causas de estos fenómenos: ¿Qué creen los chilenos que determina la pobreza y la riqueza? ¿Son los principales responsables los atributos individuales o las barreras estructurales de la sociedad? Estas opiniones son importantes porque determinan la motivación para invertir en políticas focalizadas o redistributivas e informan el diseño y prioridades en la agenda pública. La Encuesta Nacional Bicentenario permite evaluar estas preguntas, pues aborda las principales razones de la riqueza y la pobreza. Para la riqueza, los encuestados deben elegir dos de las siguientes categorías: dinero heredado de la familia, además de influencia y contactos sociales o iniciativa y trabajo duro, y gran habilidad y talento personal. Estas respuestas pueden dividirse claramente entre causas estructurales fuera del control directo del individuo (las dos primeras) y causas individuales que refieren a la responsabilidad personal (las dos últimas). En el caso de la pobreza, las alternativas ofrecidas son: que los padres también sean pobres, la falta de oportunidades, la flojera y falta de iniciativa, y los vicios y el alcoholismo. La diferenciación entre causas estructurales e individuales también es clara.

Como cada persona respondió por dos causas, es posible construir una tipología que distingue: percepción estructural (ambas causas atribuidas son estructurales), percepción individual (ambas son individuales) y mixta (combina una individual y una estructural). Usando esa clasificación, obtenemos que 67% elige una razón mixta

para explicar la riqueza; 33%, ambos factores individuales y 14%, ambos factores estructurales. En cuanto a la pobreza, estos porcentajes son respectivamente 57%, 44% y 18%. En suma, las razones individuales emergen como mucho más relevantes que las estructurales. Este hallazgo es sorprendente porque Chile es una sociedad muy desigual en el contexto internacional, donde el decil más rico recibe un ingreso veinte veces mayor que el del decil más pobre, comparado con una brecha de no más de ocho veces en países desarrollados. La movilidad intergeneracional es también muy restringida en el contexto internacional. Dadas estas condiciones, es razonable predecir que los chilenos atribuirían a barreras sociales, fuera del control individual, las posibilidades de éxito y fracaso. Pero eso no es lo que encontramos.

¿Por qué? Para discutir posibles razones es necesario, primero, indicar que estos hallazgos no son una anomalía de la Encuesta Nacional Bicentenario. De hecho, una mayor atribución individual se reporta consistentemente en otras encuestas nacionales, por ejemplo, la de movilidad social realizada por el Instituto de Sociología UC en 2001. Segundo, esta tendencia no es exclusiva de la idiosincrasia chilena. Existe, incluso más pronunciadamente, en otras naciones latinoamericanas donde las barreras a la movilidad son tanto o más elevadas que en Chile, como reporta la Encuesta de Cohesión Social 2007 realizada por el PNUD en siete países de la región. Para hacer las cosas más complicadas, en sociedades donde la desigualdad es mucho menor y la movilidad, más pronunciada –el caso emblemático de lo anterior son las sociedades escandinavas con extenso Estado de bien-

* Este artículo se benefició significativamente de la tesis de magister de Mauricio Bucca "Mérito y culpa en una sociedad estratificada. Un modelo explicativo para las creencias sobre la riqueza y la pobreza en América Latina". Instituto de Sociología UC, 2009.

estar, como Suecia, Noruega y Finlandia— las percepciones son precisamente opuestas a las latinoamericanas. Los ciudadanos de esos países tienden a creer que las causas estructurales tienen mucha mayor relevancia y desestiman la responsabilidad individual. De esta breve comparación resulta claro que no existe una correlación fuerte y unívoca entre la igualdad de oportunidades que provee el país y las opiniones de sus ciudadanos.

¿Qué factores podrían influir en las percepciones de riqueza y pobreza? La literatura especializada distingue entre características de las personas y de las sociedades. Entre las primeras se encuentran la edad y el nivel socioeconómico de los individuos, en particular su ingreso y educación. Nótese que estas dos variables podrían tener un efecto diferente. Altos ingresos se correlacionarían con una atribución individual motivada por una legitimación de la propia posición o autointerés en mantener

los propios beneficios (y bajos ingresos con una atribución estructural por las razones opuestas), mientras que alta educación, neta de ingresos, se ha relacionado con mayor información y sensibilidad sobre las potenciales barreras que la sociedad impone y, por tanto, con una mayor percepción de factores estructurales.

Algunos investigadores sugieren que, más que el nivel de bienestar socioeconómico, lo que importa es la experiencia de movilidad de los individuos: aquéllos que han experimentado movilidad ascendente tenderían a presentar una visión más individualista porque han sido capaces de elevarse respecto de sus orígenes. En contraste, quienes han descendido en la escala social mostrarían una visión más estructural que les aliviaría la percepción de fracaso. Finalmente, la posición ideológica de las personas, en una escala de izquierda a derecha, debería tener una correlación fuerte con la atribución de

Tabla 1 | **Porcentaje de la población chilena con atribución individualista de la pobreza y la riqueza¹**

	Creencias individualistas sobre:	
	La pobreza	La riqueza
Total	44	33
Edad		
18-34	43	34
35-50	41	35
51 y más	49	32
Educación		
Básica	45	29
Media	47	34
Superior	41	35
Ingreso		
Tercio inferior	45	33
Tercio medio	42	34
Tercio superior	45	34
Movilidad educacional intergeneracional		
Descendente	37	22
Inmovilidad	46	33
Ascendente	44	36
Ideología		
Izquierda	41	28
Centro	44	36
Derecha	45	36

¹ Porcentajes basados en la pregunta: A su juicio, ¿cuál de las siguientes razones es la más importante para que una persona tenga mucho dinero/para que una persona sea pobre en este país? (Dos menciones: razón más importante y segunda más importante). Encuesta Nacional Bicentenario Universidad Católica - Adimark 2010.

la riqueza y pobreza. Esto, considerando que las ideologías de izquierda tienden a privilegiar la responsabilidad del Estado y los factores estructurales, mientras que las ideologías de derecha promueven la libertad y responsabilidad individual.

La tabla 1 sugiere que ninguna de estas explicaciones tiene un asidero fuerte en Chile. La variación entre grupos de edad, ingreso y educación es limitada. Muy sorprendentemente, casi no hay diferencias entre orientaciones ideológicas. O la izquierda chilena es muy liberal, o la derecha es muy populista, el asunto es que el eje tradicional izquierda-derecha no inspira atribuciones de responsabilidad diferentes. La única brecha algo más sustantiva concierne a la experiencia de movilidad individual: aquéllos que han retrocedido en nivel educacional respecto de sus padres tienden a privilegiar la atribución estructural. Este grupo, no obstante, alcanza sólo al 7% de la población, dado que la expansión educacional ha derivado en que la gran mayoría tiene más formación que sus padres.

En síntesis, las características de los individuos destacadas por la literatura especializada parecen no dar cuenta de la preferencia por causas personales de la riqueza y la pobreza. ¿Qué factores sociales ofrece la literatura como potencial explicación? Principalmente dos: la sociedad en realidad provee importantes oportunidades de movilidad y los individuos las reconocen; y la sociedad tiene un escaso asidero clasista, por lo que las personas simplemente no perciben la dimensión estructural de los logros individuales. En cuanto a lo primero, si bien la expansión educacional y el crecimiento económico recientes han provisto oportunidades de avanzar respecto de la generación anterior, Chile destaca por su baja movilidad en el contexto internacional. Estudios económicos y sociológicos revelan una gran reproducción intergeneracional, especialmente en el sector alto de la distribución. Así, mientras la probabilidad de que una persona con origen en el quintil inferior permanezca en dicho nivel en su adultez es de 34%, la probabilidad de que alguien continúe en el quintil superior aumenta a 46%, figura mucho mayor que en países desarrollados. En otras palabras, nacer en una familia aventajada provee un importante “seguro” que garantiza el bienestar socioeconómico de los chilenos. Ello sugeriría que la atribución de la riqueza podría ser particularmente “estructuralista”, cuando lo contrario es observado: sólo el 14% refiere a factores estructurales versus un 18% que menciona estos argumentos para explicar la pobreza.

La hipótesis sobre un asidero clasista sugiere que en las sociedades donde históricamente los intereses económicos, particularmente de la clase trabajadora, han tenido expresión política, dando origen a movimientos y confrontaciones sociales, la cultura política no ha olvidado la relevancia de los factores estructurales. La forma clásica de ejemplificar este argumento es la comparación entre Europa Occidental y Estados Unidos: en Europa las demandas obreras fueron masivas y se canalizaron en partidos que luego ascendieron a poderes gobernantes en la forma socialdemocrática. Ello hizo que el núcleo de la cultura política de esos países incluyera la relevancia de factores estructurales como fuente de intereses de clase, oportunidades y bienestar. Es plausible, entonces, que la debilidad de las organizaciones políticas de base clasista en Chile y Latinoamérica, y su reemplazo por una tradición marcada por el populismo personalista, haya dificultado históricamente la comprensión de factores estructurales, aunque es improbable que este argumento dé cuenta enteramente de la preferencia por determinantes individuales.

En suma, la literatura especializada parece iluminar poco sobre la atribución individualista del éxito y el fracaso socioeconómico en Chile. ¿Qué pudiera explicarla, entonces? Quiero sugerir un factor consistente con la alta desigualdad y restringida movilidad que caracteriza al país, que se focaliza en la diferencia entre causas inmediatas y distales de la pobreza y la riqueza. La hipótesis es la siguiente: *las barreras estructurales operan muy temprano –sin exageración, desde el útero– y cuando su efecto finalmente es observable, las desventajas sociales aparecen como atributos enteramente individuales. De esta forma, lo que observamos es la consecuencia de la desigual distribución de oportunidades que se vuelve parte de la biografía y las características personales y aparece visiblemente como mérito o fracaso individual.*

Una creciente literatura de la perinatología, neurobiología y psicología del desarrollo indica que la ventaja y desventaja social afectan el desarrollo individual desde el comienzo de la vida y se magnifican durante los primeros años. Desde el útero, los infantes que tienen la mala fortuna de que sus madres presenten deficiencias nutricionales (incluyendo obesidad), escasos recursos socioeconómicos, inadecuada atención médica, una situación de conflicto y estrés doméstico, falta de redes sociales, etc., muestran una desventaja que se manifiesta en su peso y talla al nacer, su edad gestacional y salud temprana. Estas dificultades se incrementan en los años

preescolares cuando los niños están expuestos a distintos niveles de afecto, estimulación cognitiva, lingüística y emocional, diferentes grupos de pares y modelos de rol en su entorno inmediato. En el caso de Estados Unidos, por ejemplo, psicólogos han demostrado que el vocabulario que manejan niños pobres y ricos a los 16 meses es virtualmente idéntico (todos hablan bastante poco), pero a los 28 meses los menores de nivel socioeconómico alto ya conocen 600 palabras versus 200 en el sector bajo. A los 36 meses, en tanto, esta brecha ha aumentado a 1.150 versus 380 palabras.

Las desventajas tempranas son cruciales porque las habilidades que determinan el bienestar económico son *jerárquicas*, es decir, el desarrollo posterior depende de haber completado satisfactoriamente etapas anteriores, y porque son *interdependientes*: las dimensiones cognitiva, lingüística, social y emocional se complementan mutuamente. De este modo, una desventaja temprana limita desarrollos posteriores, estableciendo trayectorias de desventaja acumulativa o, como lo plantea amargamente el economista James Heckman, resultando en que “un niño que se atrasa tempranamente puede no recuperarse nunca” (“a child that falls behind may never catch up”).

El determinismo es probablemente incorrecto, como lo demuestran los estudios de niños huérfanos expuestos a adversidad y privación severa, pero que experimentan una impresionante recuperación emocional y cognitiva después de ser adoptados por familias con recursos. Sin embargo, el principal hallazgo de esta investigación es que cuando los menores tienen aproximadamente cinco años y se preparan para entrar al sistema escolar, las diferencias en sus habilidades cognitivas y no-cognitivas, según sus niveles socioeconómicos, son ya enormes y difíciles de remontar. Al entrar a la escuela, estas inequidades se exacerban por las distintas calidades educacionales a las que son expuestos. Pero ya la principal brecha ha sido establecida. Como lo demuestra una investigación educacional en Estados Unidos, alrededor de tercero básico las diferencias por nivel socioeconómico se han estabilizado. Crucialmente, estas brechas se expresan en medidas visibles y concretas de logro, talento y esfuerzo individual, como notas, puntajes de pruebas estandarizadas y evaluaciones de conducta. A través del ciclo de vida temprano ocurre un proceso de transformación de desventajas socioeconómicas y culturales en logros individuales certificados por el sistema educativo y los pares, en un ciclo endógeno que sedimenta las ventajas y desventajas del origen.

El resultado de este proceso es que las oportunidades tempranas devienen en aptitudes y valores individuales y son sancionadas como logros meritocráticos. El mejor ejemplo en Chile de esto es la Prueba de Selección Universitaria (PSU). Cada año, en enero, cuando aparecen los resultados, nos lamentamos de la significativa brecha entre jóvenes con distintos niveles socioeconómicos y dependencias educacionales. La PSU, sin embargo, es un sistema de selección meritocrático por excelencia: anónimo y universalista, no permite evaluaciones subjetivas o el uso de contactos e influencias para obtener un cupo. Al mismo tiempo, es la coronación de una acumulación de ventajas que comienza desde la concepción. Si bien la teoría del capital humano sugiere que decidir ingresar a la universidad es el resultado de un cálculo racional –los individuos lo harán si el beneficio a través de su ciclo de vida es mayor que el costo directo y de oportunidad o pérdida de los ingresos que podrían recibir si trabajaran en vez de estudiar– en realidad, para el sector de altos ingresos (que muy probablemente le incluye a usted lector, o a sus hijos, o sus conocidos), nunca existió la opción de no cursar estudios superiores.

La biografía de estos jóvenes se construye en base a buena nutrición y cuidados de salud preventivos y curativos, educación de alta calidad desde la etapa preescolar, socialización familiar que inculca la relevancia de la formación, hábitos de estudio, perseverancia y responsabilidad, además de soporte adicional con tutores particulares y abundantes modelos de rol que hacen de la transición a la educación superior un proceso normal. Naturalmente, el joven en cuestión estudió, fue responsable e hizo las tareas. Nadie utilizó contactos o influencias para garantizarle un cupo en una institución superior de elite, y los altos retornos económicos a la educación que obtenga serán la compensación adecuada a su elevado nivel de capital humano. Eso hace perder de vista que la posibilidad de que el talento individual se manifestara y desplegara dependió sustantivamente de una serie acumulativa de ventajas tempranas que son distribuidas desigualmente.

Esto no significa negar la autonomía individual, postular que el talento y el esfuerzo son puramente determinados por las condiciones estructurales, o que no existan personas que son capaces, por una combinación de atributos individuales excepcionales y afortunadas circunstancias, de sobrepasar desventajas enormes. Sí significa que las ventajas económicas y culturales desde el comienzo de la vida moldean las aptitudes personales, que en rea-

lidad es imposible completamente dividir estos factores, así como es imposible separar herencia y ambiente.

Para llevar este punto al extremo: en sociedades con alta desigualdad socioeconómica y reclutamiento meritocrático (por ejemplo, a través de estrategias como la PSU) emerge la “meritocracia heredada”, la certificación individualista de ventajas desigualmente distribuidas desde el inicio de la vida. Debido a que las trayectorias personales son largas y las brechas emergen y se estabilizan extremadamente temprano, no es extraño que, tanto los individuos que recibimos dichas ventajas o desventajas, como la sociedad en su conjunto, olvidemos hasta qué punto las historias personales se despliegan en un contexto que provee diferentes oportunidades a sus miembros y que cuando éstos alcanzan la adultez, la consecuencia de este proceso acumulativo aparece como atributo esencialmente personal.

¿Cuáles son las implicancias de este enfoque? Algunas son directas e incontrovertibles. Hay amplias áreas de política social que pueden contribuir a la reducción y compensación sistemática de la desventaja temprana. Atención de salud de alta calidad para madres y recién nacidos, suplementación nutricional, acompañamiento a las madres y familias, provisión de guarderías y jardines para las mujeres que deban o quieran trabajar, focalización en educación básica de calidad que forme habilidades tempranas irremplazables, además de disponibilidad de tutores y profesores de refuerzo para niños que lo necesiten.

Como plantea convincentemente el economista Heckman, la inversión en el desarrollo temprano es una de las pocas instancias de política social donde no existe una tensión entre eficiencia y equidad: dicha inversión es altamente eficiente, porque un peso gastado produce altos retornos a través del ciclo de vida de las personas y, al mismo tiempo, promueve la igualdad de oportunidades reduciendo las consecuencias de los “accidentes de la cuna”. Este enfoque tiene también dimensiones más controvertidas. Por ejemplo, si parte de la brecha de oportunidades entre distintos niveles socioeconómicos incluye valores y orientaciones familiares, hasta dónde es legítimo y deseable intervenir al interior de los hogares para compensar estas potenciales desventajas ¿Dónde está el límite entre la igualación de oportunidades y la libertad individual de decidir cómo criar a los hijos y conducir la propia vida? ¿Hasta qué punto es simplemente realista pretender influir en aspectos que podrían corresponder a la vida privada? Esta preocupación, más

que decisiones técnicas, apunta al tipo de sociedad deseable y buena, y a las inevitables decisiones entre bienes potencialmente enfrentados. Junto con proveer información empírica de calidad, la encuesta realizada por la Universidad Católica y Adimark invita a este tipo de conversación con miras al país del Bicentenario.

Referencias

- Cunha, F., Heckman, J., Lochner, L. and Masterov, D.** 2006. Interpreting the evidence on life cycle skill formation. Chapter 12 in E. Hanushek and F. Welch eds. *The Handbook of Economics of Education* Oxford: Elsevier.
- Heckman, J.** 2006. Skill formation and the economics of investment in disadvantaged children. *Science* 312: 1900-1902.
- Shonkoff, J. and Phillips, D.** 2000. *From neurons to neighborhoods: The science of early childhood development.* Washington DC: National Academy Press.
- Torche, F.** 2009. Sociological and economic approaches to the intergenerational transmission of inequality in Latin America. *Research for Public Policy. Human Development*, HD-09-2009, RBLAC-UNDP, New York.

Comentario

JAVIER NÚÑEZ

Académico del Departamento de Economía
de la Universidad de Chile

La Encuesta Nacional Bicentenario Universidad Católica - Adimark constituye una valiosa herramienta para medir y evaluar las percepciones de la población sobre diversos aspectos socioeconómicos, valóricos y culturales de relevancia que configuran un viaje al “alma de Chile”. Entre estas dimensiones se encuentran el papel que le cabe al Estado en el ámbito económico y la expansión de las oportunidades, además de las posibilidades de movilidad social existentes en el país. En términos generales, los resultados asignan un rol relativamente importante, pero acotado, al Estado en la vida económica y el bienestar social. En cambio, los chilenos resaltan la injerencia del mérito, el esfuerzo y la agencia individual en determinar el bienestar económico de las personas. Adicionalmente, los datos señalan una percepción favorable hacia las oportunidades de movilidad existentes en Chile. A continuación se desarrollan cuatro comentarios en torno a los resultados antes descritos.

Primero, los datos obtenidos son coherentes con la instalación en Chile de un modelo económico donde la idea del esfuerzo y el mérito individual es central, al menos en la teoría y en el discurso, y donde tanto la adscripción como el Estado-empleador posiblemente juegan un rol más moderado que antaño en las posibilidades de movilidad social de los individuos.

Resulta significativo –y en mi opinión positivo– observar que dichos ideales parecen tener un grado significativo de aprobación y legitimación, que es relativamente transversal (a pesar de existir un menor apoyo en los

sectores más pobres, como cabría esperarse). Al escribir estos comentarios, es casi inevitable pensar en que la derrota de la Concertación, en enero de 2010, podría estar asociada a una lectura errónea de las preferencias y aspiraciones de la ciudadanía (particularmente los sectores medios), que tal vez sustentaba el simple discurso de “más Estado” por parte de esa coalición¹.

Sin embargo, debe recalcar que los resultados señalados corresponden sólo a opiniones y percepciones. Aunque en sí mismas son incuestionablemente válidas y legítimas, no necesariamente deben ser tomadas como un reflejo inequívoco de los patrones subyacentes en materia de movilidad social, ni de la importancia real que en Chile poseen el esfuerzo, el mérito y la agencia individual en relación a las circunstancias de origen que los chilenos enfrentamos.

Una primera crítica es que lo que para la población en general puede atribuirse a agencia individual (“flojera”, “falta de iniciativa”, etc.) puede estar reflejando desigualdades de circunstancias de origen que, en alguna medida, explican y determinan esas formas de conducta. En las últimas décadas, la evidencia empírica ha mostrado cómo diversas habilidades cognitivas y no cognitivas asociadas a logros en la vida adulta en bienestar económico (empleos, ingresos) y conducta social (drogas, criminalidad) se configuran en un grado importante por las condiciones de vida y de estimulación intelectual y cognitiva, en entorno afectivo, influencia de los pares y de los modelos y referentes a los que los individuos están expuestos –sin su elección– en las etapas tempranas del ciclo de vida².

En este contexto, resulta claro que las opiniones de la población podrían estar influidas por una “ilusión de agencia individual” que, en parte, corresponde a procesos tempranos y complejos vinculados a las circunstancias y

¹ Como sugiere el iluminador análisis de “Andrea: la vendedora de Isapre” de Cristóbal Aninat y Gregory Elacqua de la Universidad Diego Portales.

² Véase, por ejemplo, la abundante literatura desarrollada por el premio Nobel en Economía, James Heckman, junto a sus colaboradores.

condiciones socioeconómicas de origen. Por eso, tomar literalmente las respuestas de los encuestados sobre la importancia del esfuerzo individual puede contribuir a desperfilar, errónea y nocivamente, el incuestionable rol que al Estado y las políticas públicas le caben en disminuir las desigualdades en las circunstancias socioeconómicas de origen.

Otro dato peculiar se relaciona con la percepción relativamente generalizada sobre las elevadas oportunidades de movilidad social que prevalecen en el país. Este resultado aparece como enigmático, debido a que la evidencia empírica coloca a Chile como una nación de modesta movilidad intergeneracional del ingreso en relación con la evidencia internacional³. Este hecho es, además, coherente con resultados teóricos y prácticos que postulan una relación inversa entre desigualdad de ingresos y movilidad intergeneracional de los ingresos. De esta forma, es esperable que un país con elevada inequidad, como Chile, posea también bajo índices de movilidad social⁴.

Frente a esto, cabe preguntarse por qué puede surgir tal disonancia entre las evidencias y las percepciones. Una hipótesis es que las expectativas que las personas tienen sobre qué constituye un importante movimiento social ascendente o descendente están truncadas en relación a la verdadera magnitud de la desigualdad socioeconómica del país. A modo de ejemplo, tal vez pasar del estrato “D” al “C3” o “C2” puede constituir para muchos un significativo salto en la posición relativa, aun cuando es un cambio modesto si se considera la enorme brecha social que persiste respecto del grupo ABC1.

Esta hipótesis es coherente con la evidencia empírica que sugiere que las personas poseen una visión distorsionada de su posición socioeconómica en la sociedad, y una percepción truncada de la desigualdad⁵. Por ejemplo, la mayoría se siente perteneciente al “estrato o clase media”, aun cuando la práctica indica que la idea de “clase media” difiere sustancialmente entre los grupos sociales. En una sociedad con un grado importante de segregación espacial y socioeconómica, como la nuestra, lo anterior sugiere que las expectativas de “éxito” serán modestas y estarán condicionadas a los referentes –sesgados– de cada cual, lo que ayudaría a exacerbar la

percepción de movilidad social respecto del real nivel subyacente.

Por otra parte, este patrón también podría explicar el rol exacerbado que, en opinión de la población, posee la agencia individual por sobre las circunstancias de origen. Es natural esperar que al comparar a personas de similares condiciones de origen social (sus referentes), el principal elemento diferenciador en materia de estatus sean aspectos como el “esfuerzo” y el “mérito” individual, aunque el origen tenga un rol de primer orden en explicar el nivel socioeconómico de las personas, como indica la evidencia para Chile.

¿Sería, entonces, necesariamente mejor para las personas y la sociedad en su conjunto que los individuos tuvieran una visión más acertada de su verdadera posición relativa y de las oportunidades efectivas de movilidad social? Esta interrogante es compleja y va más allá del marco de estos comentarios.

En suma, los resultados de la encuesta en torno al rol del Estado en el ámbito social y económico y las percepciones de la movilidad social son ciertamente importantes y sugerentes, pero no deben ser tomados literal ni irreflexivamente. Más bien, sus alcances se matizan y enriquecen a partir de los contrastes y comparaciones que pueden establecerse con la evidencia que se ha generado desde la investigación académica.

Por último, una reflexión en torno al papel de las políticas públicas: tomar en serio el objetivo de promover la movilidad y la igualdad de oportunidades exige abordar todas las inequidades en las circunstancias de origen de importancia, como las diferencias en calidad y en recursos entre los establecimientos escolares (tema extenso que no se aborda aquí), y también el rol que juegan los hogares. Estos son –quién sabe o no– uno de los principales mecanismos intergeneracionales de transmisión de la desigualdad y, por tanto, uno de los factores clave que obstaculizan una mayor equidad.

En vista de ello, la búsqueda de una igualdad de oportunidades requeriría una profundización de las políticas sociales (como el programa Chile Crece Contigo y elementos del Chile Solidario) que permitan reducir el rol que los hogares juegan en reproducir la inequidad.

3 Véase, por ejemplo, Torche (2005) para movilidad intergeneracional ocupacional y Núñez y Miranda (2009) para evidencia de movilidad intergeneracional del ingreso.

4 Véase, por ejemplo, Solon (2002, 2004), Corak, M. (2006) and Andrews y Leigh (2008).

5 Véase, por ejemplo, Núñez (2005).

Esto, a su vez, genera una superposición –y un potencial conflicto– entre los ámbitos tradicionales de la familia y del Estado y las políticas públicas, tema que aún ha sido poco abordado en nuestro país. La evidencia comparada señala distintos modelos para resolver esta superposición de funciones, atribuciones, derechos y deberes entre hogares/padres y el Estado. Es posible que, por ahora, exista un amplio espacio para avanzar en políticas pro oportunidades que no presentan un mayor dilema. Sin embargo, la profundización de dichas iniciativas posiblemente conlleve a la necesidad de abordar y discutir cómo resolver una mayor superposición de ambos ámbitos y revisar los modelos que hoy damos por sentados.

Referencias

- Andrews, D. and Leigh, A.** 2008. More inequality, less social mobility. *Applied Economics Letters*. pp. 1466-4291.
- Corak, M.** 2006. Do poor children become poor adults? Lessons from a cross country comparison of generational earnings mobility. *Research on Economic Inequality*, 13(1), pp. 143-188.
- Núñez, J.** 2005. Living under a veil of ignorance. Mimeo. Departamento de Economía, Universidad de Chile.
- Núñez, J. y Miranda, L.** 2009. La movilidad intergeneracional del ingreso y la educación en Chile, en *El arte de clasificar a los chilenos*. A. Joignant y P. Guell, editores. Santiago.
- Solon, G.** 2002. Cross-country differences in intergenerational earnings mobility. *Journal of Economic Perspectives* 16(3), p. 59-66.
- Solon, G.** 2004. A model of intergenerational mobility variation over time and place, in Miles Corak (editor). *Generational income mobility in North America and Europe*. Cambridge University Press, Cambridge.
- Torche, F.** 2005. Unequal but fluid: social mobility in Chile in comparative perspective. *American Sociological Review*, vol. 70, (3), pp. 422-50.

Comentario

RODRIGO CASTRO

Vicedecano de Postgrado de la Facultad de Negocios
de la Universidad del Desarrollo

Hasta los años cincuenta, y avanzado los sesenta, subsistían fuertes resabios de una sociedad cerrada en la que el lugar de origen determinaba fuertemente el de destinación, en otras palabras, la posición de los padres marcaba la de los hijos. La élite basaba su poder no sólo en factores económicos (tenencia de la tierra y vinculaciones con todas las áreas de producción), sino también en criterios de estatus social, vinculados a los orígenes familiares. El acceso era discriminatorio y selectivo, lo que se traducía en una absorción gradual, lenta y limitada de esta nueva clase media por parte de la élite establecida. En resumen, se estaba frente a una sociedad relativamente excluyente, rígida, poco permeable y que se resistía a integrar a nuevos inmigrantes o a contraer matrimonios exógenos.

Sin embargo, en las últimas tres décadas, Chile ha vivido transformaciones estructurales que han modificado profundamente el escenario descrito anteriormente. Por un lado, el crecimiento económico ha permitido un aumento significativo de los niveles materiales, además de cambios en los patrones de consumo y estilos de vida. Por otra parte, hemos enfrentado modificaciones en la estructura social, a través de un incremento en el capital cultural y educacional. Por ejemplo, sabemos que un 70% de los actuales estudiantes de la educación superior pertenece a la primera generación que accede a ese nivel. Al mismo tiempo, se aprecia un debilitamiento de las instituciones del Estado como principal mecanismo de ascenso social y económico, además de un cambio en los criterios de jerarquización social, dando mayor prioridad al mérito.

No obstante, el diagnóstico anterior y el optimismo que refleja la Encuesta Nacional Bicentenario 2009 no deben llevar a una paralización en términos de políticas públicas. Es un hecho que la movilidad está hoy relacionada con el crecimiento económico y que un retroceso en este ámbito puede traducirse en estratificaciones mucho más rígidas. A la luz de los resultados de este sondeo, cabe preguntarse si el aumento en capital educacional ya se amortizó en términos de movilidad social durante los últimos años. Para evitar lo anterior existe un acuerdo transversal sobre la necesidad de avanzar en la calidad del sistema educacional.

Un elemento que aparece en la encuesta es el dilema de más o menos Estado. En este tema muchas veces se plantean las reformas tributarias como solución para reducir las brechas de desigualdad. Sin embargo, de acuerdo a la evidencia empírica, éstas no han ayudado a mejorar la distribución del ingreso. Según Engel et al. (1999), el coeficiente Gini (que mide el grado de inequidad en la distribución del ingreso) casi no se modifica después de aplicar impuestos. Incluso empeora algo (0.488 a 0.496) y cambia muy poco tras reformar radicalmente la estructura tributaria (subir IVA a 25% o flat tax igual a 20%).

La evidencia también sostiene que sólo la política de gasto mejora la distribución del ingreso (0.496 a 0.439). En este contexto, se puede afirmar que la estrategia “Robin Hood” no renta. De acuerdo a Mardones (2008), que modela efectos de segundo orden ante cambios tributarios en salarios, el mayor impuesto a la renta hace caer el ahorro. El mayor consumo, en tanto, incrementa marginalmente el PIB per cápita, pero disminuye en el largo plazo, dada la baja en la inversión. Además, caen los salarios y, por ende, los ingresos hogares en todos los quintiles. Considerando el efecto del mayor gasto público (se destina a primer quintil), el Gini apenas se reduce 1,5% tras aumentar los impuestos directos en hasta un 50%.

De acuerdo a lo anterior, los desafíos en cuanto a política pública están en la focalización del gasto social. Aunque se han logrado avances significativos en este frente, es claro que se puede hacer más. En efecto, éste podría ser aún más redistributivo y eficiente si se piensa en una reasignación virtual sin pensiones de aquella parte de éste que hoy está valorizada por la Encuesta Casen (2006). Se debe recordar que el gasto social representa un 69,1% del gasto total en 2009. El gasto total será aproximadamente de US\$36.000 millones, por lo tanto, el gasto social asciende a US\$24.480 millones. Un 63% de éste actualmente se canaliza a través de los subsidios monetarios (focalizados) y los subsidios de salud y educación (universales), y un 37% se puede refocalizar en el 40% más pobre. De esta manera, el ingreso total (la suma del ingreso autónomo, subsidios monetarios y subsidios de educación y salud) del 20% más pobre aumentaría de \$24.6013 a \$408.852 mensual por hogar. Aunque mejora la razón entre el 20% más rico y el 20% más pobre de 13,1 a 6,8 veces cuando se incluyen las transferencias focalizadas y universales que entrega el Estado, esta brecha podría ser aún menor si se focaliza más el gasto social. De hecho, este guarismo disminuiría a 4,1 veces.

Ahora bien, estudios en Chile sobre movilidad intra e intergeneracional han puesto en discusión el hecho de que nuestra sociedad sea clasista, no meritocrática y rígida en su estructura social. En otras palabras, quien nace pobre muere pobre, y quien nace rico muere rico. La Encuesta Nacional Bicentenario nos plantea esta pregunta. Pero, ¿es Chile una sociedad rígida en su estructura socioeconómica? La respuesta no sólo es importante por el actual contexto, sino también porque el tema de la movilidad es, desde el punto de vista del bienestar, más relevante que el porcentaje de pobres y que la mala distribución del ingreso. Ciertamente, sociedades con mejores niveles de movilidad tienen mayor crecimiento económico, son percibidas como más justas y garantizan mayor estabilidad social y política.

De acuerdo a Sapelli (2008), se podría esperar que la distribución del ingreso en las cohortes más recientes haya mejorado, ya que ha habido una disminución importante de las personas con educación básica incompleta, en tanto que el máximo de años de educación ha permanecido fijo. Este proceso se acentúa después de la generación nacida en 1963 y, nuevamente, después de 1973. En este contexto, es compatible un aumento de la desigualdad intergeneracional con una caída en la intrageneracional. Aún hay un porcentaje sustancial de per-

sonas con educación básica incompleta, por lo que la distribución del ingreso está anclada en su punta izquierda. Y como ha habido crecientemente más gente con educación superior completa y sus retornos han sido cada vez mayores -al menos por un tiempo- no es de sorprender que la distribución de stock no haya mejorado, porque la desigualdad intergeneracional ha ido creciendo.

Cuando vemos los avances en la reducción de la mortalidad infantil, comparando las cifras actuales con la década del sesenta, Chile aparece entre los cinco países que más han mejorado a nivel mundial. Pero ¿qué pasaría si se toma el promedio de la mortalidad infantil medida en las generaciones desde la década del sesenta y hasta hoy? El número sería muy malo. ¿Qué sucedería si las políticas de salud pública se realizaran considerando ese promedio, en lugar de analizar lo que está pasando con las generaciones más recientes? Se cometería un grave error.

Un antecedente que también es relevante y consistente con la evidencia anterior es lo que ha ocurrido con la transición educacional y la distribución de los salarios. El ingreso de más personas a la educación superior ha ido reduciendo la desigualdad salarial y los premios por habilidades a través de dos mecanismos (Engel y Eberhard, 2008). Por un lado, al crecer la oferta de trabajadores con educación universitaria, el premio salarial es menor y la diferencia de salarios entre trabajadores -con y sin educación superior- se reduce. Asimismo, cuando la fracción de universitarios crece, pero todavía es pequeña, aumenta la desigualdad salarial, porque la proporción de ricos sube, pero sigue siendo menor. En el período 1975-1990 los salarios del 10% más rico subieron más rápido que los del 10% más pobre y de la media del país. Entre 1984-1986 el 10% más rico tenía un salario 11.6 veces superior al 10% más pobre, y entre 1994-1996 la brecha se redujo a 8.18 veces, mientras que entre 2004-2006 alcanzó a 6.56 veces.

En relación a la igualación de oportunidades, se aprecia que la educación es la principal política pública al respecto. Los resultados muestran accesos relativamente parejos a la formación básica y media, pero una brecha importante en los resultados educacionales según ingreso familiar. Se ha avanzado, pero estamos aún lejos de acercar las oportunidades en función del origen. En este sentido, la desigualdad de ingresos pone límites a la equiparación de oportunidades.

También hay importantes desafíos en el contexto del empleo, considerando que las brechas respecto de la

participación laboral y la cesantía son significativas. A modo de ejercicio, y con el fin de señalar la importancia del trabajo como política de igualación de oportunidades, se puede realizar una simulación en donde se presente la distribución de hogares por quintiles de ingreso de acuerdo al ingreso autónomo de éstos. Se recalcula el ingreso de los hogares asumiendo para cada desempleado un ingreso igual a la remuneración promedio de su quintil. Como resultado de ello, hay hogares que cambian de quintil. Por ejemplo, en el segundo quintil hay 824.950 hogares. Cuando se le asigna un ingreso remunerado a los desempleados (igual al sueldo promedio de su quintil), 92.569 hogares caen al primer quintil y 95.891 suben al tercero. Es decir, el 77,2% se mantiene en el mismo nivel, el 11,2% cae y el 11,6% sube. Los 92.569 hogares que bajan representan el 2,2% del 20% de los hogares de ese quintil. Este ejercicio nos permite encontrar que el Gini disminuye de 0,54 a 0,52 debido a la disminución del desempleo.

Concluyendo, Chile ha experimentado un ciclo de crecimiento económico sostenido a tasas inéditas: han aumentado significativamente los niveles materiales, han cambiado los patrones de consumo y los estilos de vida. Estas transformaciones tienen consecuencias sociales que se manifiestan en mayor movilidad social y más meritocracia. Hoy día tenemos una nueva mirada de la distribución del ingreso, aunque existen desafíos pendientes en el empleo, la cobertura y la calidad de la educación.

Transición religiosa

ANGÉLICA THUMALA

Académica del Instituto de Sociología UC

El panorama religioso en el mundo contemporáneo se caracteriza por su dinamismo. La evidencia disponible sobre diversas sociedades muestra la importancia que tienen hoy los llamados nuevos movimientos religiosos (Barker 1982, Jenkins 2000), la emergencia de fundamentalismos dentro del cristianismo, el judaísmo y el Islam (Marty and Appleby 1995, Ammerman 1987, Kepel 1997), los movimientos de renovación carismática (Csordas 1997, Chesnut 2003) y la conversión a religiones diferentes o el retorno a la religión de origen (Roof 1989, Sherkat and Wilson 1995, Loveland 2003, Hervieu-Léger 1999, Lehmann and Siebzeher 2006). ¿Cómo se ubica Chile en el contexto internacional de cambio religioso?

Si bien la Encuesta Nacional Bicentenario no es comparativa, presenta resultados relevantes sobre movilidad religiosa que se pueden interpretar a la luz de la evidencia internacional¹. Este sondeo informa sobre conversión y abandono de toda forma de religión, ambos indicadores de movilidad religiosa. Chile muestra, según el estudio realizado por la Universidad Católica y Adimark, una elevada estabilidad en materia de preferencias religiosas. La excepción la constituye la conversión a iglesias evangélicas, mayoritariamente pentecostales².

A continuación se propone una interpretación de la relativa estabilidad de las preferencias religiosas de los chilenos y cómo nuestro país se diferencia de otras naciones, especialmente EE.UU., donde la búsqueda de alternativas religiosas o espirituales es más frecuente.

Se presentan, además, algunos comentarios sobre los posibles límites sociales y culturales a la conversión en nuestro país.

Estabilidad: La permanencia del catolicismo

De acuerdo a la Encuesta Nacional Bicentenario, sólo un 13% de los consultados afirma haber cambiado de religión alguna vez en su vida. La mayor parte permanece dentro de la tradición religiosa en la que fue educada y que en nuestro país sigue siendo mayoritariamente católica. La adhesión al catolicismo, aunque ha bajado tres puntos desde 2006, continúa alta (67%). Por supuesto, esto no quiere decir que, en general, la intensidad de la adhesión o la práctica sean elevadas³, sino sólo que las personas no han considerado necesario cambiar de religión. La mayoría de los encuestados no ha buscado una alternativa religiosa diferente a la que le fue dada por nacimiento o educación: su identidad permanece católica, se podría decir, “por descarte” y en muchos casos se caracteriza por la apatía o la indiferencia. No obstante, no todo es apatía: cerca de un tercio de los encuestados (32,3%) afirma haber hecho un compromiso religioso “personal y duradero en algún momento de su vida, aunque no haya significado cambiar de creencias”. Esto es más frecuente entre los evangélicos (46%) que entre los católicos (33%).

La estabilidad de las preferencias religiosas en Chile no parece constituir un fenómeno excepcional cuando se lo compara con el porcentaje de conversiones en otros paí-

1 Más aún, los resultados sobre conversión son consistentes con el porcentaje (13%) de conversos en Chile, según la encuesta comparada sobre religión del International Social Survey Programme (ISSP) de 1998 (Barro, R., J. Hwang and R. McCleary. 2010).

2 La encuesta distingue entre evangélicos y protestantes. La palabra evangélica incluye a las iglesias pentecostales y asume que la mayor parte de los evangélicos son pentecostales. El término protestante se refiere a las iglesias “históricas” (luterana, anglicana, metodista). En este documento se usan las palabras evangélico y pentecostal indistintamente, en el entendido de que la mayor parte son pentecostales.

3 La asistencia a la iglesia o servicios religiosos es comparativamente baja en nuestro país, pues no supera el 19% (Lehmann 2002).

ses. Un análisis reciente de la Encuesta Mundial de Valores (WVS) y del International Social Survey Program (ISSP) ubica a Chile (con un 13%) por sobre los niveles de países católicos europeos, cuyas tasas son inferiores al 1% (España, Italia, Polonia) (Barro, Hwang and McCleary 2010).

Sin embargo, cuando se compara a Chile con EE.UU., nuestro país aparece como menos dinámico. En EE.UU. más de un cuarto de la población adulta (28%) ha abandonado la fe en la que fue educada en favor de otra o ninguna religión. Si se incluyen los cambios entre denominaciones protestantes, este porcentaje sube a 44%⁴.

Hay dos interpretaciones posibles para dar cuenta de la diferencia en movilidad religiosa entre Chile y EE.UU.:

- a. La primera es que en EE.UU. existe un mercado religioso pluralista y competitivo. Desde el punto de vista de la teoría de la elección racional o Rational Choice theory (RCT), aquellas sociedades en las que hay mayor diversidad en la oferta religiosa y donde el Estado no regula este mercado o no privilegia una tradición por sobre otra, habrá mayor vitalidad religiosa (Stark and Bainbridge 1987, Iannaccone 1991, Finke and Stark 1992). El término vitalidad no sólo incluye mayor participación (medida como asistencia a la iglesia y servicios religiosos), sino también la transferencia o “switching” entre denominaciones o religiones. El supuesto es que en una economía religiosa desregulada, las organizaciones religiosas tienen incentivos para competir por atraer a nuevos miembros. En cambio, según este enfoque, en sociedades donde hay monopolio religioso y menor pluralismo, la oferta a cargo de un “establishment” eclesiástico que tiene su supervivencia garantizada (y es, por lo tanto, perezoso o negligente), será menos atractiva y la participación y los porcentajes de conversión, más bajos.

Si se aplican estas hipótesis al caso chileno, el hecho de que el catolicismo gozara hasta hace poco de un estatus privilegiado en la cultura y ante la ley sería una de las causas de la relativa falta de vitalidad de nuestro mercado religioso, es decir, de las bajas tasas de participación y conversión. Según el enfoque de la RCT, sería de esperar que, por ejemplo, la Ley de Igualdad Jurídica Religiosa o Ley de Culto de 1999,

faciliten un mayor pluralismo y competencia y, por lo tanto, una mayor vitalidad. El nuevo estatus legal sumaría al éxito ya establecido del pentecostalismo o la difusión de las diversas manifestaciones que caben dentro del New Age y espiritualidades orientales. En otras palabras, en un contexto de diversidad de la oferta y de competencia entre opciones religiosas, los chilenos estarían más inclinados a buscar las alternativas que se ajusten mejor a sus necesidades o personalidades y habría más conversiones o cambios entre religiones.

La comparación con EE.UU. se justifica, por supuesto, sólo si se quiere hacer un análisis de la actividad religiosa como mercado siguiendo el modelo norteamericano. Esto, sin embargo, tiene varias limitaciones. Numerosos críticos del enfoque de la RCT han notado que la realidad norteamericana es única y que el análisis de los monopolios religiosos no es universalizable (Sharot 2002, Carroll 1996). En primer lugar, el modelo de las congregaciones, propio de la tradición protestante, no es extensible al mundo católico. En el protestantismo, la participación religiosa involucra a la vida cotidiana de un modo como no lo hace el catolicismo. De hecho, la identidad católica no gira tanto en torno a la actividad diaria en la Iglesia, sino a la participación esporádica en ritos y fiestas distribuidos durante el año. Esto es especialmente cierto para el catolicismo popular que se manifiesta en la celebración de fiestas y peregrinaciones. Muy importante es también el hecho de que la práctica del catolicismo parece ser más flexible doctrinariamente que el protestantismo. Los católicos se relacionan selectivamente con las enseñanzas de la Iglesia y no tienen problemas en mezclar elementos de la religión oficial con el de otras creencias o tradiciones espirituales. Es decir, las barreras del “monopolio” de la Iglesia en sociedades católicas son más bien porosas. Aquí emerge la segunda interpretación sobre la diferencia en movilidad religiosa entre Chile y EE.UU.

- b. La práctica del catolicismo es menos confesional o rígida que aquélla que se da en congregaciones protestantes. A pesar de los esfuerzos por parte de la jerarquía de la Iglesia o de algunos movimientos de elite por enseñar o seguir la doctrina “oficial”, en la

⁴ Ver la encuesta “US Religious Landscape Survey” realizada en 2007 por *The Pew Forum on Religious and Public Life*. Metodología y resultados disponibles en <http://religions.pewforum.org/reports>. Esta encuesta se suma a amplia evidencia sobre movilidad religiosa en EE.UU. El “switching” (o cambio) ha sido documentado una y otra vez, comenzando por el trabajo de R. Stark y C.Y. Glock, *American Piety: The Nature of religious Commitment* de 1968. Según estudios posteriores, entre un cuarto y un tercio de los norteamericanos cambian de fe o denominación durante sus vidas (Roof 1989, Kluegel 1980, Roof and MacKinney 1987, Wuthnow 1988, Loveland 2003).

práctica, las personas son selectivas y abiertas a ideas externas. La flexibilidad en la práctica del catolicismo –que ha llevado a algunos a describirla como religión “a la carta”, dada la tendencia de las personas a combinar elementos de diversas tradiciones según sus preferencias personales (Hervieu-Léger 2000)– hace innecesario buscar religiones alternativas. Si la persona puede acomodar nuevas creencias a su religión de origen, sin que esto afecte sustancialmente su identidad, se hace innecesario abandonar la religión original. No es sorprendente, entonces, que el cambio religioso sea escaso. La identidad católica “a la carta” no obliga a renunciar a creencias o prácticas a veces contrarias a las enseñanzas oficiales. Algo similar ha argumentado Iannaccone (1994) utilizando el enfoque del mercado religioso: el cambio es más probable desde organizaciones menos estrictas o demandantes, porque el costo de participar en ellas es menor. El catolicismo no sólo ofrece diversas tradiciones y carismas sino que, incluso en los movimientos más conservadores, es apropiado por sus miembros de modos particulares (Thumala Olave 2010). En suma, la flexibilidad del catolicismo pone un límite al crecimiento del fenómeno del “switching”, como lo demuestran las bajas tasas de conversión en otros países católicos citados más arriba.

Si bien la mayoría de los consultados en la Encuesta Bicentenario no ha cambiado su preferencia o identificación religiosa, quienes sí lo han hecho constituyen una transformación cualitativamente importante en el espacio religioso nacional. A continuación se ofrecen algunos comentarios sobre la conversión al pentecostalismo y el abandono de toda forma de religión.

Cambio: Pentecostalismo y “ninguna religión”

Uno de los fenómenos más comentados en las últimas décadas entre los estudiosos de la religión en América Latina es la expansión del pentecostalismo (Martin 1990; Stoll and Garrard-Burnett 1993; Freston 1998). La conversión a iglesias pentecostales en sectores populares y medios ha cuestionado la hegemonía de la Iglesia Católica y ha sido asociada a la modernización del continente. Esto, porque las iglesias evangélicas atraen a personas afectadas por procesos de racionalización económica y su conversión involucra cierto grado de racionalización de la conducta (Martin 1990; Berger 1999). El éxito del movimiento pentecostal no reside en la dimensión doctrinaria, sino en las redes de apoyo psicológico y práctico que brindan las iglesias a sus miembros

en contextos de miseria, enfermedad y desplazamiento social y geográfico (Martin 1990).

En efecto, las condiciones sociales y psicológicas de quienes se convierten a alguna religión, no solamente a las iglesias pentecostales, han sido analizadas en términos de crisis. Este tránsito generaría un cambio radical en la persona que la ayuda a superar situaciones dolorosas o difíciles (Rhodes 1986). Los estudios sobre conversiones al pentecostalismo, en particular, han encontrado que la mayor parte de las conversiones se dan entre los más pobres y, en algunos casos, entre personas de clase media en procesos de movilidad (Roberts 1968, Martin 1990). En Chile, la evidencia disponible indica que el mayor número de conversiones ocurre en sectores de bajos ingresos. La Encuesta Nacional Bicentenario muestra que la mayor parte de quienes cambian de preferencia religiosa se convierten a alguna iglesia evangélica (42%). De ese grupo, el 18,7% pertenece al estrato C3 y el 56,7% al estrato D. Al parecer, es ahí donde se ubica el núcleo del tránsito religioso en nuestro país.

La encuesta también aporta algo de información sobre las motivaciones para la conversión. Si bien la pregunta respecto de si hubo algún evento asociado al cambio arroja como respuesta mayoritaria “ningún evento en particular” (38,3%) seguido de “otro evento” (21,9%), (lo que se discute más abajo), las opciones sustantivas que siguen son enfermedad (22,1%) y matrimonio (8,5%). Ambos eventos son relevantes a la luz de la evidencia existente. La enfermedad, física y moral, es una de las razones más frecuentes en las narrativas personales para explicar el paso a iglesias evangélicas en estudios cualitativos del fenómeno. Típicamente, los conversos describen su vida en términos de crisis y quiebre radical con el pasado, y la enfermedad es parte de las experiencias de crisis personal que la conversión elimina abruptamente (Martin 1990).

El matrimonio es otro de los factores asociados a la conversión (Sherkat 1991; Musick and Wilson 1995). Se cree que las personas que se casan fuera de su religión de origen son más proclives a cambiar de religión, porque buscan reducir la discrepancia con la religión del cónyuge. En estrecha relación con el matrimonio existe un factor adicional asociado a las conversiones: la intensidad de la socialización religiosa temprana. Se estima que el éxito de los padres en la enseñanza religiosa de los hijos determina la intensidad de las creencias y la probabilidad de cambiar de religión más adelante en la vida (Sullins 1993; Hadaway and Marler 1993). Un

50% de los encuestados afirma que es importante para ellos “casarse con alguien que concuerde con su orientación religiosa (o no religiosa)”. Es probable que la consistencia entre las creencias de los padres esté ayudando a mantener a las personas dentro de su religión de origen y contribuyendo a la relativa estabilidad del panorama religioso chileno.

Si la conversión al pentecostalismo responde, en algunos casos, a situaciones de crisis, el abandono de la religión parece producirse de modo más paulatino. Entre aquéllos que han transitado hacia el ateísmo o “ninguna religión” (21% de quienes han cambiado sus preferencias religiosas), un 65,8% señala que esto no se debió a “ningún evento particular”. En vez de ser el resultado de una acción o evento específico, la pérdida de la fe o el abandono de la religión parecen consistir de un proceso gradual. Esto ocurre no solamente en el caso del abandono de la religión, sino también de la conversión. Si bien los trabajos clásicos sobre conversión se centran en la idea de crisis y cambio radical, estudios posteriores argumentan que la transformación es gradual. Beckford (1978), por ejemplo, en su estudio sobre testigos de Jehová en Inglaterra, reporta que las narrativas de conversión “niegan que se pueda identificar un momento decisivo. Típicamente hablan de sus experiencias de conversión en términos de una progresión constante (aunque no siempre suave) de estados mentales marcados por cambios cualitativos sutiles [...] en el modo de ver las cosas y de actuar” (Beckford 1978: 253)⁵. Los resultados de la Encuesta Nacional Bicentenario son consistentes con la idea de la transición gradual no motivada. En todos los casos de cambio religioso, los encuestados responden que este paso no está asociado a “ningún evento en particular”, tanto para el total de quienes cambian (53%), como para quienes transitan hacia otra religión (45,6%), cambian a evangélico (38,3%) o dejan la religión (65,8%).

Finalmente, no es posible saber si el porcentaje de personas sin religión irá en aumento, como podría esperarse de acuerdo a teorías de la secularización que vinculan la modernización con el declive de la práctica y las creencias religiosas (Norris and Inglehart 2004). Lo que sí es preciso notar es el bajo porcentaje de personas que señala que otros conocen su preferencia no religiosa (38%, comparado con el 76% entre los católicos y 81% entre los evangélicos). Esto puede indicar que los no creyentes

perciben su opción como menos aceptable socialmente⁶ y que las condiciones para una secularización avanzada no se han dado en el país. Vale la pena, no obstante, observar los indicadores de movilidad religiosa en el tiempo para tener una mejor idea de cómo los procesos de modernización y globalización van afectando la identidad religiosa en el país.

Referencias

- Ammerman, N T.** 1987. *Bible believers: fundamentalists in the modern world*, New Brunswick: Rutgers University Press.
- Barker, E.V. (ed.)**. 1982. *New religious movements: A perspective for understanding society*, New York: Edwin Mellen Press.
- Barro, R., Hwang, J. and McCleary, R.** 2010. Religious conversion in 40 countries, *Journal for the Scientific Study of Religion* 49 (1): 15-36.
- Beckford, J.A.** 1978. Accounting for conversion, *The British Journal of Sociology*, 29 (2): 249-262.
- Berger, P.L. (ed.)**. 1999. *The desecularization of the world: resurgent religion and world politics*, Washington, D.C.: Ethics and Public Policy Center; Grand Rapids, Mich: W.B. Eerdmans Pub. Co.
- Carroll, M.** 1996. Stark realities and eurocentric/androcetric bias in the sociology of religion, *Sociology of Religion* 57(3): 225-239.
- Csordas, T.** 1997. *Language, charisma and creativity*, Berkeley, CA.: University of California Press.
- Chesnut, A.** 2003. *Competitive spirits: Latin America's new religious economy*, New York: Oxford University Press.
- Finke, R. and Stark, R.** 1992. *The churching of America 1776-1990: Winners and losers in our religious economy*. New Brunswick, NJ: Rutgers University Press.
- Freston, P.** 1998. Pentecostalism in Latin America: characteristics and controversies, *Social Compass* 45: 335-58.
- Hadaway, C. K. and Marler, P. L.** 1993. All in the family: Religious mobility in America *Review of Religious Research* 35:97-116.
- Hervieu-Léger, D.** 1999. *Le Pèlerin et le Converti. La religion en mouvement*, Paris: Flammarion.
2000. *Religion as a chain of memory*, New Brunswick, NJ: Rutgers University Press.

⁵ Traducción propia.

⁶ La pregunta es: “Pensando en la gente que usted conoce (que no sean familiares), en general, ¿ellos saben que usted es católico, evangélico o no creyente?”.

- Iannaccone, L.R.** 1991. The consequences of religious market structures: Adam Smith and the economics of religion, *Rationality and Society* 3:156-77.
1994. Why strict churches are strong, *American Journal of Sociology*, 99 (5): 1180-1211.
- Jenkins, P.** 2000. *Mystics and messiahs: Cults and new religions in the American history*. Oxford: Oxford University Press.
- Kepel, G.** 1997. *Allah in the west: Islamic movements in America and Europe*, trans. Susan Milner. Stanford, CA: Stanford University Press.
- Kluegel, J. R.** 1980. Denominational mobility: Current patterns and recent trends, *Journal for the Scientific Study of Religion* 19: 26-39.
- Lehmann, C.** 2002. ¿Cuán religiosos somos los chilenos? Mapa de la religiosidad en 31 países, *Estudios Públicos* (verano) pp. 21-40.
- Lehmann, D. and Siebzeher, B.** 2006. *Remaking israeli judaism: the challenge of Shas*, New York: Oxford University Press.
- Loveland, M.** 2003. Religious switching: Preference development maintenance and change, *Journal for the Scientific Study of Religion* 42 (1): 147-157.
- Martin, D.** 1990. *Tongues of fire: The explosion of pentecostalism in Latin America* Oxford: Basil Blackwell.
- Marty, M. E. y Appleby, R.S. (eds.)**. 1995. *Fundamentalisms comprehended*, Chicago, London: University of Chicago Press.
- Musick, M. and Wilson, J.** 1995. Religious switching for marriage reasons, *Sociology of Religion* 56:257-70.
- Norris, P., and Inglehart, R.** 2004. *Sacred and secular: Religion and politics. Worldwide*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Pew Forum on Religious and Public Life.** US religious landscape survey. <http://religions.pewforum.org/reports>
- Rhodes, J. S.** 1986. Conversion as crisis and process: A comparison of two models, *Journal of Psychology and Christianity* 5: 20-27.
- Roberts, B.** 1968. Protestant groups and coping with urban life in Guatemala, *American Journal of Sociology*, 6: 753-67.
- Roof, W. C. and McKinney, W.** 1987. *American mainline religion: Its changing shape and future*, New Brunswick: Rutgers University Press.
- Roof, W.C.** 1989. Multiple religious switching: A research note, *Journal for the Scientific Study of Religion* 28 (4): 530-535.
- Sharot, S.** 2002. Beyond christianity: A critique of the rational choice theory of religion from a weberian and comparative religions perspective, *Sociology of Religion* 63 (4): 427-454.
- Sherkat, D. E.** 1991. Leaving the faith: Testing theories of religious switching. *Social Science Research* 20:171-87.
- Sherkat, D.E., and Wilson, J.** 1995. "Preferences, constraints, and choices in religious markets: An examination of religious switching and apostasy", *Social Forces* 73(3):993-1026.
- Stark, R. and Bainbridge, W. S.** 1987. *A theory of religion*. New York: Lang.
- Stark, R. and Glock, C. Y.** 1968. *American Piety: The nature of religious commitment*. Berkeley: University of California Press.
- Stoll, D. and Garrard-Burnett, V.** 1993. *Rethinking protestantism in Latin America*. Philadelphia: Temple University Press.
- Sullins, P. D.** 1993. Switching close to home: Volatility or coherence in protestant affiliation patterns?, *Social Forces* 72:399-419.
- Thumala Olave, M.A.** 2010. The richness of ordinary life: Religious justificaion among chile's elite, *Religion* 40 (1): 14-26.
- Wuthnow, R.** 1988. *The restructuring of american religion*. Princeton, NJ: Princeton University Press.

Comentario

JUAN SEPÚLVEDA

Director de Planificación Institucional del Servicio
Evangélico para el Desarrollo (SEPADE)

1. En sus aspectos religiosos, la Encuesta Nacional Bicentenario 2009 concentra su atención principalmente en las dos confesiones que cuentan con mayor número de fieles entre la población nacional: la católica y la evangélica. En el primer caso, se trata de una religión que, desde el punto de vista institucional, se manifiesta en una Iglesia, mientras que en el segundo se expresa en numerosas iglesias de diversas tradiciones histórico-teológicas y jurídicamente independientes entre sí. Complementariamente, la encuesta presta atención a aquel sector que se declara sin religión (ateo o agnóstico). Aunque el cuadro general identifica un 4% que se adscribe a “otra religión”, el análisis no profundiza en este grupo.
2. En 2009, un 67% de los encuestados se declaró católico y un 16% evangélico. Al analizar comparativamente las respuestas de estos dos grupos frente a las preguntas sobre temas religiosos, se concluye que un mayor porcentaje de evangélicos ha experimentado una conversión religiosa; que para un número significativo de ellos su transición religiosa se vincula a algún evento biográfico significativo; que un mayor porcentaje de la población evangélica reconoce haber efectuado, en algún momento de su vida, un compromiso religioso personal y duradero (sin que necesariamente implique un cambio de religión); y que un número mayor de evangélicos considera importante que sus hijos/as conserven la religión que les han enseñado. Aunque la diferencia es poco significativa, también más evangélicos creen importante casarse con alguien de la misma religión.

De lo anterior se concluye que para la población evangélica, al compararse con la católica, la militancia religiosa se entiende como un compromiso personal voluntario y no tanto como una expresión de la identidad cultural nacional, como sería el caso de la mayoría católica. Si se interpretan tales resultados desde un punto de vista teológico, se advierte su coherencia con el tipo de tradiciones confesionales que predominan en el mundo evangélico chileno, esto es, que conciben a la Iglesia como una comunidad voluntaria y en que la pertenencia a ella está mediada por una experiencia personal de conversión.

Una interpretación sociológica de los resultados podría sugerir otra hipótesis de trabajo: que independientemente de la tradición confesional, lo descrito corresponde al comportamiento más característico de una minoría religiosa. Es decir, en una sociedad donde el protestantismo histórico es mayoritario, la población católica tendería a actuar o a comprender la experiencia religiosa de un modo similar al comportamiento de la población evangélica en Chile.

3. No obstante que para la mayoría de los evangélicos chilenos la experiencia de conversión, que en la encuesta se aborda como un fenómeno de transición religiosa, es constitutiva de su identidad, en el análisis de sus resultados se concluye que “el fenómeno de la transición de una religión a otra es una realidad poco extendida en Chile”. Aunque esta afirmación se sustenta en los resultados objetivos del sondeo, esto es, que solamente un 13% de la muestra declara haber cambiado de religión alguna vez en su vida, nos parece importante someterla a discusión a la luz de la evolución de la situación religiosa en el país durante el siglo XX.

Las afiliaciones religiosas, según el Censo Nacional de 1907, eran las siguientes: católicos 98.1%; protestantes 1%; no saben 0.8% y no creyentes, 0.1%¹. En

¹ Cifras tomadas de Cristián Parker. Christianity and popular movements in the twentieth century, en K.Aman and C.Parker (eds.). Popular culture in Chile. Resistance and survival. Boulder, CO: Westview Press, 1991, pp. 41-64 (aquí p.43).

cambio, los resultados religiosos del censo de 2002 fueron los siguientes: católicos 69.9%; evangélicos 15.1%; ortodoxos, judíos, musulmanes, testigos de Jehová y mormones 2.2%; ateos o agnósticos 8.3% y otros 4.4%². Si observamos la variación a lo largo del siglo de los tres grupos estudiados en la encuesta, resulta lo siguiente: católicos -28.2%, evangélicos +14.1% y sin religión +8.2%.

Lo anterior sugiere que durante el siglo XX se experimentaron significativas transiciones religiosas. Por lo tanto, cabe preguntarse si el porcentaje relativamente bajo de personas que en la Encuesta Nacional Bicentenario 2009 declara haber cambiado de religión indica que estamos frente a una disminución del fenómeno de la transición, y que las confesiones religiosas, en términos relativos, están tendiendo a estabilizarse. Semejante cuadro podría favorecer, eventualmente, la cooperación entre las confesiones religiosas por sobre la competencia. Pero si comparamos la evolución de los mismos grupos entre las encuestas 2006 y 2009 resulta la siguiente variación solamente en tres años: católicos -3%, evangélicos +2% y sin religión +1%. Por lo tanto, me parece que no hay mucha base para subvalorar la significación del fenómeno de la transición religiosa. Desde este punto de vista, sería interesante recoger el porcentaje de evangélicos que declara haber tenido un cambio de religión.

A mediados de diciembre de 2009 participé en un pequeño encuentro de evangélicos-pewenches de Alto Biobío³. De un grupo de 15 pastores y líderes laicos de diversas iglesias presentes en las comunidades indígenas, todos habían vivido un cambio de religión. A partir de esta experiencia me pregunto si el fenómeno de la transición se encuentra hoy más concentrado en algunos sectores específicos de la población. Es posible que en los niveles populares, tanto urbanos como rurales, donde el mundo evangélico se insertó tempranamente en el siglo XX, el crecimiento de estas iglesias esté más determinado por la transmisión intergeneracional de la fe, o incluso por el cambio de una iglesia evangélica a otra, que por la conversión propiamente tal. Por el contrario, en otros grupos donde el crecimiento evangélico es más reciente, como en las comunidades indígenas o sectores urbanos más acomodados, es probable que

el factor conversión sea más relevante. Por ello, sería interesante cruzar el porcentaje que en la Encuesta Nacional Bicentenario declara haber experimentado un cambio de religión con datos, tales como grupo socioeconómico e identidad étnica.

4. Finalmente, quisiera comentar brevemente algunos aspectos más específicos de la encuesta. El primero se refiere a la pregunta por el posible vínculo entre el cambio de religión y determinados eventos biográficos, como nacimiento de un hijo, muerte de un familiar, matrimonio, enfermedad u otro. En el comentario a las respuestas, la significación del término “eventos” se asocia fundamentalmente a los ritos (se sobreentiende: bautismo, matrimonio, ritos funerarios) y se indica que solamente el cambio de católico a evangélico aparece motivado, en un 60%, por este tipo de eventos. Mi sospecha es que en el caso de las respuestas evangélicas, estos “eventos” deben asociarse menos a “ritos” que a “crisis” personales. En efecto, parte del atractivo de las iglesias evangélicas parece estar en su capacidad para acoger y contener a personas que experimentan situaciones de crisis (enfermedad, conflicto matrimonial, violencia intrafamiliar, adicción, etc.). Este aspecto debería tenerse en cuenta para afinar mejor la pregunta en encuestas futuras.

Lo segundo es un comentario respecto de la categoría “otra religión”. Entre las encuestas de 2006 y 2009 se mantiene un 4% que declara pertenecer a “otra religión”, lo que es bastante cercano al 4.4% del censo de 2002. La diferencia está, sin embargo, en que éste identifica a varios grupos religiosos que la Encuesta Nacional Bicentenario incluye en la categoría “otra religión”. Por lo tanto, para hacer comparables los resultados, en el caso del censo de 2002 habría que sumar esos otros grupos a la categoría “otra religión”, lo que arroja un 6.6% del censo versus el 4% de los resultados de la encuesta. Dado el tamaño pequeño de las minorías religiosas no evangélicas, esta diferencia es bastante alta y tiende a confirmar mi sospecha de que, en el caso del censo, la categoría “otros” incluye, erróneamente, a una parte de la población evangélica, debido a que la diversidad de sus afiliaciones eclesiásticas puede producir un error de registro por parte de los encuestadores. Si esto fuera cierto, un desafío para el Instituto Nacional de Estadísticas es capacitar mejor

² INE, censo 2002: Síntesis de resultados. Santiago, 2003, p. 25s.

³ Ver nota de prensa en <http://www.sepade.cl/noticias/display.php?id=451>

a los encuestadores del censo para el buen manejo de las categorías religiosas. Cuando alguien responde, por ejemplo, que es “metodista” o “aliancista”, antes de apresurarse a ubicarla en la categoría “otra”, el encuestador debiera contrapreguntar para que la misma persona encuestada escoja entre las categorías “evangélica” u “otra”.

En tercer lugar, llama la atención que en los gráficos en los que se considera la variable de género se observa una cierta coincidencia con aquellos comportamientos en los cuales las mujeres y los evangélicos presentan un porcentaje más alto. La única excepción es la importancia que las mujeres asignan a la conservación de la religión de los padres, punto

en que el porcentaje de evangélicos es menor que el de católicos. Lo anterior sugiere que, a pesar de que la espiritualidad evangélica no da lugar a prácticas marianas, ésta, de todos modos, tiene una apelación especial al género femenino.

Por último, quiero señalar que habría sido interesante que, con respecto al porcentaje de personas que han transitado de otra religión al catolicismo (el 4% de quienes han tenido un cambio de religión en su vida, que corresponden al 13% del total de la muestra), se recogiera el dato acerca de qué grupos provienen estas personas que se convierten al catolicismo. Esta información podría ayudar a interpretar el significado de ese porcentaje.

Encuesta Nacional Bicentenario Universidad Católica - Adimark 2009

Vicerrectoría de Comunicaciones y Educación Continua

Edición

Marcela Alam

Diseño

Diseño Corporativo UC

Vicerrectoría de Comunicaciones y Educación Continua

Impresión

Salviat Impresores

400 ejemplares

www.uc.cl/politicaspublicas

politicaspublicas@uc.cl



PONTIFICIA
UNIVERSIDAD
CATÓLICA
DE CHILE

SEDE CASA CENTRAL

Av. Libertador Bernardo O'Higgins 324, piso 3, Santiago.
Teléfono (56-2) 354 6637.

SEDE LO CONTADOR

El Comendador 1916, Providencia.
Teléfono (56-2) 354 5658.

CENTRO DE POLÍTICAS PÚBLICAS UC

- Vicerrectoría de Comunicaciones y Educación Continua • Facultad de Arquitectura, Diseño y Estudios Urbanos
- Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas • Facultad de Ciencias Sociales • Facultad de Derecho
- Facultad de Educación • Facultad de Historia, Geografía y Ciencia Política • Facultad de Ingeniería • Facultad de Medicina